

**RUC N°** 1810036980-6  
**RIT N°** 128-2023  
**ACUSADO** PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA  
**DELITOS** USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO FALSO.

En Punta Arenas, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:**

**INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRIBUNAL Y LOS INTERVINIENTES**

**PRIMERO:** Que ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, integrada por los magistrados don Jaime Álvarez Astete, doña Rosana Vidal Ojeda y don Octavio Salinas Cabrera, en causa RIT 128-2023, el Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscal don Sebastián González Morales, presentó acusación, a la que se adhirió la querellante representada por el abogado José Garrao Álvarez, en contra de **PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA**, cédula de identidad N°7.681.200-4, domiciliado en Avenida Colón N°279, comuna de Punta Arenas, representado por la Defensora Privada doña Carmen Victoria Greco Burgos, domiciliada en calle Independencia N°85, oficina 504, de la ciudad de Linares, Región del Maule, por la participación que tuvo en calidad de **autor** del delito de **USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO FALSO**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 194 y 193 N°1 y 2, todos del Código Penal.

**ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y QUERELLANTE**

**SEGUNDO:** Que la acusación formulada por el Ministerio Público, objeto del juicio, contiene los siguientes hechos:

*«Que las víctimas Jorge Iván Beattie Ainol, Claudia Katerin Beattie Ainol y Verónica Beatriz Beattie Ainol, eran los únicos sobrinos de doña Adriana Beattie Silva, falleciendo doña Adriana con fecha 7 de febrero de 2018. Es en esas circunstancias que el acusado **PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA**, les indicó que no debían preocuparse de nada de lo relativo a los bienes ni de la posesión efectiva de doña Adriana Beattie Silva, ya que todo era de él, que existía un testamento cerrado, situación que motivó una gestión judicial para su apertura.*

*El 22 de mayo de 2018, se lleva a efecto la audiencia de apertura de testamento cerrado ante el magistrado del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas,*



*en causa V-29-2018, oportunidad en que el Notario Evaldo Rehbein Utreras hizo entrega de un sobre cerrado, lacrado, que en su carátula consta que fue otorgado el 19 de junio de 2017, ante el Notario Iván Andrés Toledo Mora, suplente del Titular Evaldo Rehbein Utreras por doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, ante los testigos Luis Enrique de la Latorre Santana, Eduardo Andrés Mercado Alvarado y Ana María Vladilo Rizzo, apareciendo 4 firmas la de la testadora y de los 3 testigos.*

*Se procedió a abrir el sobre, se dio lectura al testamento y se ordenó su protocolización, la que se practicó en el Registro de Instrumentos Públicos, de 22 de mayo de 2018, con el N° 338, Rep. 1197, de la Notaría de Evaldo Rehbein Utreras.*

*En el testamento cerrado doña Adriana Beattie Silva designa heredero universal de todos sus bienes a Patricio Araneda Mena, nombrándolo además albacea con tenencia y administración de bienes.*

*El testamento consta de 3 hojas de papel blanco, impresas en tinta, por el anverso, por tanto, no es un texto manuscrito por la testadora, y presenta como primera particularidad que está en blanco el día del mes de mayo de 2017 en que la testadora lo otorgó. Presenta, además, errores ortográficos, por ejemplo, en la cláusula “PRIMERO: ... y estar domiciliado...”; pero más llamativo y decidor, es que en el texto se equivoque en los apellidos de ambos padres: dice ser hija de don Jorge Beattie Wolker (se escribe Walker) y de doña Blanca Uvara Silva Bonnad (se escribe Bonnand).*

*El texto del testamento cerrado con ese blanco en la fecha descrito y errores en la individualización de los padres de la causante, culmina con una firma, en una hoja final, sin texto escrito que la preceda, estableciéndose además por pericias caligráficas que los grafismos del testamento no fueron realizados por la fallecida Adriana Beattie Silva, perjudicándose en consecuencia a las víctimas, esto es, a sus legítimos herederos, toda vez que al forjarse un documento privado que tiene por testada la sucesión de la Sra. Adriana Beattie Silva quedando como heredero universal el acusado **PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA**, las víctimas Jorge Iván Beattie Ainol, Claudia Katerin Beattie Ainol y Verónica Beatriz Beattie Ainol, pierden su condición de integrantes del cuarto orden sucesorio - colaterales en tercer grado- de una sucesión intestada, no pudiendo ejercer sus*

*legítimos derechos sobre los bienes muebles e inmuebles que dejaba la causante al momento de su deceso.*

Además de lo anterior, el 6 de febrero de 2018, el acusado **PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA**, haciendo uso de un mandato general que le fuera entregado por doña Adriana Beattie Silva, autocontrató y celebró un contrato de compraventa de un vehículo de la fallecida, una Station Wagon Mitsubishi Montero Patente PW.3448, la que quedó a nombre del acusado y en su poder, perjudicando igualmente de esta manera a las víctimas.»

**Por su parte, el acusador particular funda su acusación en los siguientes hechos:**

*«Desde esmayo del año 2016 el acusado Patricio Antonio Araneda Mena y la mujer de éste Irma González -ignora segundo apellido-, vivían en una casa interior del inmueble de propiedad de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva (Q.E.P.D.), ubicado en calle Colón 279, Punta Arenas, ya que Patricio Antonio Araneda Mena era su chofer y la trasladaba en su taxi, mientras que Irma González era la asesora del hogar.*

*El 6 de febrero de 2017, el acusado, mediando engaño y abuso y bajo la excusa de ser un requisito para viajar a Argentina y llevar a doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva a ese país, obtuvo que ésta le vendiera, cediera y transfiriera una Station Wagon Mitsubishi Montero Patente PW3448-6, de propiedad doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, bien mueble que quedó inscrito a nombre del acusado el 8 de febrero de 2017, siendo falso el precio fijado de \$5.400.000.- como así también la constancia que se pagó al contado.*

*Una vez que doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva se percató que no era necesario transferir la camioneta para viajar y volver de Argentina, el 22 de febrero de 2017, hubo una pelea a gritos y empujones con Patricio Antonio Araneda Mena, oportunidad en que, previo llamado de la adulta mayor, concurrió Carabineros de Chile y realizaron un procedimiento policial en el domicilio de calle Colón 279, Punta Arenas, interviniendo José Miguel Pérez Tapia, Oficial de Carabineros, y Mauricio Alejandro Flores Sáez, Cabo Primero de Carabineros, conminando al acusado Patricio Antonio Araneda Mena a que si no devolvía la Station Wagon a su dueña, ellos mismos harían una denuncia por fraude a persona mayor.*



*En ese procedimiento policial doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva solicitó a los Carabineros concurrentes que por favor hicieran que el acusado abandonara el domicilio ya que estaba siendo víctima de abuso de parte del acusado. Cuando el procedimiento policial estaba en pleno desarrollo llegó al domicilio Jorge Beattie Ainol quien presenció las peticiones de auxilio de la señora Beattie; y Carabineros conversó con el acusado y éste reconoció los problemas de convivencia y que devolvería la camioneta a la brevedad y haría abandono del inmueble.*

*Por contrato de compraventa de fecha 24 de febrero de 2017 -dos días después del incidente policial-, se reversa la compraventa anterior y el acusado Patricio Antonio Araneda Mena vende, cede y transfiere a doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, la que compra y acepta para sí, la Station Wagon aludida, en un precio de \$5.4000.000.- que aparece pagado al contado.*

*Ambas compraventas quedaron consignadas en el certificado de anotaciones del Registro de Vehículos Motorizados del Station wagon Mitsubishi y en el que se da cuenta que al 8 de febrero de 2017 el vehículo aparece a nombre del acusado Patricio Antonio Araneda Mena, y que luego se reversa la operación, apareciendo a nombre de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva el 28 de febrero de 2017.*

*Luego, en abril de 2017 le diagnosticaron cáncer a doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, lo que es aprovechado por el acusado para no hacer abandono de la propiedad hasta el día del fallecimiento de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva con fecha 7 de febrero de 2018.*

*Que las víctimas -mis representados Jorge Iván Beattie Ainol, Claudia Katerin Beattie Ainol y Verónica Beatriz Beattie Ainol-, eran los únicos sobrinos de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, quien no tenía cónyuge, hermanos, ni ascendientes o descendientes vivos.*

*En el funeral de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, el acusado Patricio Antonio Araneda Mena se les acercó a los sobrinos, querellantes y hoy acusadores, y les indicó que no debían preocuparse de nada de lo relativo a los bienes ni de la posesión efectiva de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, ya que todo era de él, que existía un testamento cerrado, situación que motivó una gestión judicial para su apertura.*



*El 22 de mayo de 2018, se llevó a efecto la audiencia de apertura de testamento cerrado ante el magistrado del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en causa V-29-2018, oportunidad en que el Notario Evaldo Rehbein Utreras hizo entrega de un sobre cerrado, lacrado, que en su carátula consta que fue otorgado el 19 de junio de 2017, ante el Notario Iván Andrés Toledo Mora, suplente del Titular Evaldo Rehbein Utreras por doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, ante los testigos Luis Enrique de la Latorre Santana, Eduardo Andrés Mercado Alvarado y Ana María Vladilo Riffo, apareciendo 4 firmas la de la testadora y de los 3 testigos.*

*Se procedió a abrir el sobre, se dio lectura al testamento y se ordenó su protocolización, la que se practicó en el Registro de Instrumentos Públicos, de 22 de mayo de 2018, con el N°338, Rep. 1197, de la Notaría de Evaldo Rehbein Utreras.*

*En el testamento cerrado doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva designa heredero universal de todos sus bienes al acusado Patricio Antonio Araneda Mena, nombrándolo además albacea con tenencia y administración de bienes.*

*El testamento consta de 3 hojas de papel blanco, impresas en tinta, por el anverso, por tanto, no es un texto manuscrito por la testadora, y presenta como primera particularidad que está en blanco el día del mes de mayo de 2017 en que la testadora lo otorgó. Presenta, además, errores ortográficos, por ejemplo, en la cláusula “PRIMERO: ... y estar domiciliado...”; como si lo redactara una persona del sexo masculino; pero más llamativo y decidor, es que en el texto se equivoque en los apellidos de ambos padres: dice ser hija de don Jorge Beattie Wolker (se escribe Walker) y de doña Blanca Uvara Silva Bonnad (se escribe Bonnand), siendo que la testadora era una persona culta y ávida lectora.*

*El texto del testamento cerrado con ese blanco en la fecha descrito y errores en la individualización de los padres de la causante, culmina con una firma, en una hoja final, sin texto escrito que la preceda, estableciéndose además por pericias caligráficas que los grafismos del testamento no fueron realizados por la fallecida Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, perjudicándose en consecuencia a las víctimas, esto es, a sus legítimos herederos, toda vez que al forjarse un documento privado que tiene por testada la sucesión de la Sra. Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva quedando como heredero universal el acusado Patricio Antonio Araneda Mena, las víctimas Jorge Iván Beattie Ainol, Claudia Katerin*



*Beattie Ainol y Verónica Beatriz Beattie Ainol, pierden su condición de integrantes del cuarto orden sucesorio -colaterales en tercer grado- de una sucesión intestada, no pudiendo ejercer sus legítimos derechos sobre los bienes muebles e inmuebles que dejaba la causante al momento de su deceso.*

*El 6 de febrero de 2018, un día antes del fallecimiento de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva, el acusado Patricio Antonio Araneda Mena, haciendo uso de un mandato general que le fuera entregado por doña Adriana Beattie Silva, auto contrató y celebró un contrato de compraventa de un vehículo de la hoy fallecida, la Station Wagon Mitsubishi Montero Patente PW.3448, la que quedó a nombre del acusado y en su poder, sin que en esa operación hubiese pago de precio, perjudicando igualmente de esta manera a las víctimas. Ese mismo día anterior a la muerte de la causante, el acusado procedió al cierre de la cuenta corriente del Banco Scotiabank 06-40075-99, no sin antes falsificar al menos cuatro cheques de dicha cuenta corriente, en los que aparece como beneficiario, cobrándolos por caja y cancelándolos mediante su firma cruzada al presentarlos a ventanilla.*

*Desde el fallecimiento de doña Adriana Beattie Silva el acusado usa y goza como dueño y señor de la propiedad de calle Colón 279, Punta Arenas; de todos los bienes muebles, joyas, dinero, arte, fotografías y bienes que sólo tienen valor afectivo para los querellantes y hoy acusadores, afectando su dignidad en tanto públicamente Jorge Beattie Ainol es una persona respetada en la comunidad y muy cercana con doña Adriana, siendo afrentoso que aparezca que la última voluntad de la causante lo excluyera a él y a doña Claudia y doña Verónica como destinatarios de sus afectos luego de fallecida.*

*Dentro de la masa de bienes quedados al fallecimiento de doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva se encuentra los derechos de la causante en un mausoleo familiar, donde se encuentran sepultados los antepasados de las víctimas lo que se añade ignominia y desprecio por la calidad y dignidad de los ofendidos».*

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos descritos constituyen el delito de **USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO FALSO**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 194 y 193 N°1 y 2, en relación con el 196, todos del Código Penal, delito en el cual le corresponde calidad de autor y el delito se encuentra consumado. Esta calificación jurídica es compartida por el querellante.



Según el Ministerio Público no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Según el acusador particular, concurren las circunstancias agravantes de responsabilidad de los artículos 12 N°9 y 12 n°18 del Código Penal.

Sobre esa base, el Ministerio Público solicita que se aplique al acusado, la pena de **5 años de presidio menor en su grado máximo**, además de las accesorias establecidas en el artículo 30 del Código Penal, todo ello junto con expresa condena en costas.

Por su parte, el acusador particular solicita se le aplique la pena de **5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo**, las accesorias establecidas en el artículo 28 del Código Penal, todo ello junto con expresa condena en costas. Además, la pena de comiso del testamento cerrado protocolizado en el Registro de Instrumentos Públicos, de 22 de mayo de 2018, con el N°338, Rep. 1197, de la Notaría de Evaldo Rehbein Utreras, disponiendo su desglose y posterior destrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal.

### **ALEGATOS FISCALES**

**TERCERO: En su alegato de apertura**, el Ministerio Público señaló que el asunto controvertido en este juicio se va a centrar en la firma del testamento de doña Adriana Beattie Silva. El acusado se vinculaba a ella a través de una relación laboral y de cercanía previa a su fallecimiento, pero ésta un año antes del fallecimiento y 3 meses antes del testamento cerrado se deterioró gravemente.

En febrero de 2017, la relación que mantenía la occisa con el acusado se dañó de manera importante, ya que el imputado puso a su nombre un vehículo de propiedad de la fallecida, sin una explicación plausible. A raíz de esta transferencia, la relación laboral cercana se deterioró tan gravemente que en dicha oportunidad doña Adriana Beattie llamó a Carabineros denunciando al acusado, dándose cuenta de la afectación de esta relación.

Este antecedente es relevante y se verá complementado con pruebas científicas, demostrándose que el testamento cerrado que se suscribió en mayo de 2017 -3 meses después del altercado- no puede decir lo que dijo, esto es, que le dejó todo su patrimonio al acusado.

La prueba científica dará cuenta que el contenido del testamento no fue firmado por la fallecida. La occisa mantenía una muy buena relación con sus tres sobrinos, por lo que no hay razón para heredarle todo su patrimonio al acusado.



La firma del testamento es falsa y no fue realizada por Adriana Beattie, lo que será refrendado por la prueba científica que ya señaló.

En cuanto a lo jurídico, se trata de un documento público u oficial, que se incluye en el artículo 193 del Código Penal, dándose los presupuestos de los N°1 y 2, distinguiéndose la carátula de lo que está en el interior, lo que resulta esencial.

La firma de la carátula es la que corresponde a la fallecida.

Agrega que documento oficial, para efectos de la ley penal no está delimitado al contenido del artículo 1699 del Código Civil; Etcheberry da una definición de documento oficial, cuya custodia concurre un funcionario público, protocolizándose con posterioridad, la jurisprudencia y la doctrina de manera absoluta ha entendido que el concepto de instrumento público incluye al oficial, a modo de ejemplo, cita la sentencia rol 91-2020 de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Podría darse la discusión respecto de la calidad del instrumento, pero no hay duda de la falsedad de la firma, por lo que la discusión no resulta más allá del bien jurídico protegido, ya que, si no se trata de un instrumento público, es uno privado, con las mismas consecuencias de desheredamiento de personas que están en el orden sucesorio, siendo un delito de todas maneras.

**En su alegato de clausura**, el fiscal señala que el núcleo de la discusión radica en la prueba científica y pericial que ha sido incorporada y conteste en el sentido de dudar de la autenticidad de la firma de la tercera página del testamento cerrado de doña Adriana Beattie en mayo de 2017, unido a la prueba de contexto que es necesaria para determinar o establecer la voluntad de la Sra. Beattie, es relevante para conocer a la persona que fallece y a la persona del acusado, lo que da indicios para construir un relato.

La lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia, nos dicen que el acusado era un trabajador de la sucesión Beattie, conociendo a la Sra. Adriana Beattie, prestándole servicios remunerados, si no fuera así no se entenderían los cheques extendidos a nombre del acusado.

En esta relación laboral, el acusado se dedicaba a los cuidados de la Sra. Adriana; en este contexto, el primer episodio relevante previo a la transmisión de su patrimonio es el episodio que denomina “Argentina”, vertiendo pruebas del



relato de la occisa, que lo único que quería era que se fuera el acusado del domicilio, 3 meses antes del testamento falso.

El imputado traspasó parte del patrimonio de la Sra. Beattie a su nombre (el vehículo), el que, de no ser por sus propias consultas, se hubiera materializado. Resulta inverosímil que no haya sabido en atención a sus viajes al extranjero y su pasión por el automovilismo, que no era necesario traspasar el vehículo, haciéndolo nuevamente el día antes del fallecimiento de la señora Adriana.

Patricio Araneda sabía el contenido del testamento cerrado, lo sabía porque se pavoneaba que era el heredero de todo, eso se hace bastante antes de la apertura del testamento cerrado, firmado ante testigos que son amigos de Araneda, el los llama y les pide ser testigos.

Resulta conteste contrastar lo que relataron los testigos de la defensa con la prueba de cargo, toda vez que se dio cuenta de la relación familiar del acusado, quien, ocultó su patrimonio a sus propios hijos según observó el mismo juez de familia, además, se dio cuenta de golpes y amenazas a sus hijos y pareja, agrega que, si bien esto no es parte del juicio, es necesario conocer al acusado, quien además empujó a la señora Adriana mientras vivía a sus expensas.

Expone, que declararon los garzones del Hotel Savoy refiriendo la buena relación del sobrino con la señora Adriana, lo mismo que relató la testigo de la defensa Cenia Gospodneteic Tafra, que vía telefónica habría hablado con Adriana Beattie, refiriendo este vínculo familiar.

Los sobrinos relataron que su tía jamás hubiese cometido los errores que se advierten en el testamento, Adriana manejaba una estancia, por lo que no se entiende cómo se equivocaría en escribir los nombres de sus padres.

Además, hay un testamento sin fecha, firmado en la última página, con una firma falsa, nunca había visto una pericia a tal nivel de detalle como la de doña Janira Acuña, quien no es cualquier perito, esta contratada por la Biblioteca Nacional para periciar firma de poetas chilenos insignes, la misma función que doña Ligia Cárdenas.

El peritaje civil del Sr. Navarrete es poco prolijo, lo que fue refrendado por doña Ligia, desde la ciencia de la caligrafía no cumple ningún requisito, es corroborado por los dichos de los peritos acompañados por la defensa.

Si uno lee el peritaje de Navarrete no se entiende, el cheque no es parte del juicio, pero permiten concluir lo mismo que doña Janira Acuña. La firma del



testamento con la de la carátula presentan disimilitud, todos los peritos establecen el buen trabajo de esta perito.

Se trata en definitiva de una firma servil y ejercitada, el acusado planeo esto, extraer sus bienes, ratificándose cuando se produce la apertura del testamento falso, sostiene su petición de condena al tratarse de un documento público, o privado, siendo en ambos casos un delito.

No hace uso de la **réplica**.

### **QUERELLANTE**

**CUARTO: En la apertura**, el querellante refirió que solicita un veredicto de condena por el uso malicioso de instrumento público falso, llamando la atención que el testamento cerrado es excepcionalísimo, lo que resulta un hecho conocido para los abogados. El testamento cerrado se usa para guardar la reserva respecto de su contenido.

La primera parte es la minuta testamentaria, manuscrita o mecanografiada, en ambos casos debe encontrarse firmada, si hay ausencia de firma o la firma es falsa, el testamento es nulo de acuerdo a lo que establece el artículo 1026 del Código Civil, esta minuta es llevada ante un Notario, aquél funcionario hace un bloqueo de la hora atendida la naturaleza de acto continuo, y lo que se hace en dicha instancia es verificar la presencia de los comparecientes, dejando constancia de aquello, adosando la hoja al sobre, recibiendo la voluntad a viva voz, firmando el sobre, en este caso su rut y huella, con los testigos. Luego, lo custodia, lo anota en un libro privado, siendo distinto al repertorio, y lo comunica al Registro Civil, es un documento público u oficial.

A partir de ahí, la sucesión es testada y no puede realizarse la posesión efectiva vía administrativa.

Respecto del uso de este documento, señala que declararán peritos, haciendo un trabajo preciso e indubitado, haciendo una línea de trazabilidad de tiempo de las firmas de doña Adriana Beattie desde una muy antigua, estampada en 1973, hasta la más reciente que es la de la carátula del testamento, coetánea a este acto jurídico (mayo de 2017, la primera y junio del mismo año la segunda).

Al momento del fallecimiento de la causante, una de las víctimas se encontraba en Santiago, llegando al velatorio, momento en donde se le acercó el acusado, diciéndole que existe un testamento cerrado y que el se encargaría de todo, siendo un momento inadecuado, repitiéndole el comentario al día siguiente.



Otra de las querellantes concurre a las notarías a consultar, encontrando el testamento, lo que obligó a contratar un abogado, abriéndose el testamento el 22 de mayo de 2018, leyéndose a viva voz y protocolizándose.

Tratándose de los delitos de falsedad, estos son instantáneos, de peligro abstracto, de efectos permanentes, pero puede ser que no haya afectación de un bien jurídico inmediato, por lo que el uso debe analizarse en el caso en concreto. Con la actuación del acusado al pedir la apertura, puso en marcha el uso del documento, induciendo a error a los herederos, demostrándose la malicia en este acto.

El acusado al declarar señaló que sólo se enteró de su contenido cuando se abrió el testamento, lo que no resulta plausible.

Si el testamento no se abre no se usa, encontramos un uso con dolo directo en este caso tras el actuar del acusado.

El testamento no tiene fecha, lo que llama la atención, está redactado en términos masculinos, equivocándose en el apellido de sus padres incluso, lo que es una muestra de la falsedad. Señala que, si bien estas situaciones no anulan el testamento, permiten ser indiciarios de la falsedad, lo que se demuestra aún más al analizar la firma evidentemente falsa.

Expone que se intentó un juicio civil, en dónde en un peritaje “aberrante”, fuera de toda metodología, se estableció que el testamento no era nulo ya que la firma es verdadera. En dicho juicio se encuentra pendiente un recurso de revisión ante la Excm. Corte Suprema, que se encuentra admisible y a la espera de este fallo.

Cualquier invocación que se haga de la cosa juzgada en materia civil se encuentra supeditada a dicho recurso.

Tras el recurso de revisión, se inició un juicio de indemnización, remitiéndose cheques por el banco Scotiabank, un mandato y un vale vista; la cuenta fue cerrada por el acusado, en aquella, se determinó que había 20 cheques falsos, de los cuales en 4 es beneficiario el acusado.

Los cheques reflejan que hay una persona que tenía acceso a estos practicando las firmas. Además, el mandato al acusado se otorgó el mismo día del testamento, la causante fue a la notaría y le otorgó un mandato general de administración de bienes al acusado.



¿Si él tenía un mandato, porqué hacia la firma? La respuesta es para evitar su publicidad. El Notario no tomó la firma en persona respecto del mandato, y quien lo coordinó fue el abogado Patricio Villegas, que a la fecha era el abogado del acusado, contestando incluso las demandas interpuestas contra el acusado.

Hace referencia a la herencia, y que dentro de ella se encuentra un mausoleo familiar, en donde se encuentran los padres de los querellantes, quedando incluso éste en el patrimonio del acusado. Lee el reglamento de cementerios referido este sepulcro, destacando la familia como los responsables de aquellos, de ahí que concluye que no tiene sentido que doña Adriana le haya dejado todos sus bienes al acusado, incluido este mausoleo.

**En la clausura**, señala que estamos frente a un documento falso por haberse falsificado la firma, se usó maliciosamente, trayendo al juicio prueba científica para acreditarlo.

Es un documento cuya naturaleza jurídica de testamento vale a la muerte del causante, requiriendo el fallecimiento de la persona para tener resultados, el evento del 22 de febrero de 2017 es un hecho cierto, hay una hoja de ruta de los carabineros que declararon, acompañándose el certificado del registro civil dando cuenta del traspaso del vehículo y la reversa que se hizo. Se formula la pregunta ¿Si dos meses después de este incidente le iba a dejar todo al acusado, porque se reversó el traspaso del vehículo?

El documento no tiene fecha, está redactado en términos masculinos, equivocándose la señora Adriana en el apellido de sus padres concluyendo con una firma falsa.

La firma dubitada es de mayo de 2017, pero la firma más indubitada de todas, que fue realizada ante ministro de fe, se nota fluida, sin temblores, coherente, diferente de la primera es posterior.

La perito Acuña expuso que las 20 letras “tt” del apellido de la occisa son paralelas, en la firma dubitada el magistral derecho llega a la mitad, las 20 letras “tt” son cruzadas por el travesaño, pero en la dubitada no, hay una diferencia evidente respecto de un gesto tipo que está en las 20 firmas, el travesaño invariablemente fue de izquierda a derecha, en este caso se hace al revés.

En cuanto a la letra “a”, precisa que siempre doña Adriana firmó con óvalos perfectos con un collage, pero en la firma dubitada no, lo mismo sucede con el arpón de la letra “b” en las 20 firmas está, en la del testamento no.

En cuanto a la inclinación axial, a través de los años, la firma de la causante es invariable, pero la dubitada se aleja completamente de esta inclinación.

Asimismo, las “rutas de salida” de la firma difieren sustancialmente unas de otras, estas pruebas científicas, más los hallazgos escriturales permiten determinar que la firma no es válida.

Al momento de la muerte de la señora Adriana, el acusado, quien era su trabajador, no consulta a la familia que va a hacer con la casa, o cuál es su destino, si mantiene el trabajo, etc., al contrario, 10 días después del fallecimiento celebraba por redes sociales. ¿A que título se mantenía en la casa si el testamento se abrió el 22 de mayo?

Refrenda que el testigo Sr. Mercado llamó al acusado luego de la apertura del testamento y le dijo que la casa le quedó a él, pero le llama la atención su reacción, al indicarle que “ya sabía”, pero no podría saberlo, en circunstancias que no concurrió ni él ni su abogado a la apertura, el acusado usa y goza de los bienes y de los dineros de la fallecida a su antojo, cobrando un vale vista el 7 de febrero de 2018, no les dice a los herederos, se auto compra el vehículo de la señora Adriana y no entrega el dinero a la sucesión, el mandato que ostentaba no lo permite, le llama la atención la prisa que tuvo para venderse el auto, lo que no se explica, ya que su jefa, la señora Adriana agonizaba en dichos momentos, luego, el cheque que pagó la transferencia era además, de la causante.

No hay animadversión de la tía para cuestionar la titularidad del mausoleo que comparten hoy en día los sobrinos con el acusado, que no tienen acceso a nada de la casa.

Agrega que el delito en cuestión es de falsedad de mera actividad, instantáneo, de peligro abstracto y de efectos permanentes, el acusado usó el testamento incluso en el velorio. Jorge Beattie fue respetuoso y esperó lo que ocurriría sin actuar de manera extrajudicial.

Da cuenta de la búsqueda del testamento, lo que también implica el uso del documento. Etcheberry amplía el concepto e incluye al concepto de instrumento público el de documento oficial.

El testamento está en el aparataje administrativo que impide que la sucesión intestada herede, debiendo mutar la posesión efectiva, advirtiéndose que sus clientes -sobrinos de la causante- fueron privados de esta posibilidad.



En otro aspecto, indica que la transacción acompañada por la defensa no puede valorarse ya que no tiene firma, no hay nada que pueda ser valorado, ya que ni siquiera constituye un documento.

Finalmente, explica que el peritaje del Sr. Navarrete no se basta a sí mismo, era un “mamarracho” de peritaje que se acompañó al juicio civil cuando las partes estaban citadas a oír sentencia, perdiéndose el juicio por ese peritaje, se acompañó al juicio el recurso de revisión pendiente, por lo que la cosa juzgada no es un argumento válido.

**En su réplica**, establece que se escuchó al Notario, le preguntó por las advertencias y le dijo que sí las había hecho, pero respecto del mandato no recordaba, y que no se requería nada más. Los testamentos cerrados son poco conocidos, excepcionalísimos, por lo que algo extraño ocurrió, el abogado Patricio Villegas es cliente de la notaría, quien coordinó todo. El testigo de la defensa dio cuenta de lo breve del trámite, por lo que deduce que las exigencias normativas no se habrían cumplido.

### **DEFENSA DEL ACUSADO**

**QUINTO: En su alegato de apertura**, la defensora señala que desde el inicio en que se hizo cargo de esta causa se ha cuestionado el delito por el cual se persigue al acusado, a su entender no se cumplen los requisitos del tipo penal. Para ello, se debe acreditar la falsedad material o ideológica del instrumento, lo que a su entender no se hizo por los acusadores, ya que no existe algún peritaje caligráfico de la firma o escritura del acusado; nunca se han hecho estas pericias, siendo una muy relevante para acreditar el ilícito en cuestión.

Luego, el instrumento del juicio lo acompañó la propia causante a la notaría, lo llevó voluntariamente ante el ministro de fe, en presencia de los testigos. Si lo que se cuestiona es su contenido, expone que sólo basta la firma del causante, la firma varía a través del tiempo, no siendo siempre idéntica en el trazo.

En lo referente a los cheques, expone que tampoco fueron protestados por disconformidad de firma, siendo certificados por el banco como originales.

Hace referencia al juicio de nulidad de testamento, que es la herramienta legal que se entrega para estos efectos, existiendo dos sentencias del 2° Juzgado Civil de esta ciudad y la Corte de Apelaciones, rechazándose esta acción de nulidad, en atención al peritaje que se realizó en dicha sede. Existen además peritajes del Labocar que establecen que no existe firma indubitada por lo que no





fue considerada falsa. El peritaje de los acusadores fue pagado por ellos, no siendo objetivo, y siendo rechazado en su oportunidad en sede civil.

Menciona los recursos intentados por los querellantes, encontrándose ejecutoriada la sentencia civil, ya que la naturaleza misma de la revisión exige una sentencia firme y ejecutoriada.

No se acreditará el uso malicioso imputado, ya que la sentencia que rechaza la nulidad se encontraba ejecutoriada, pudiéndose arrendar la casa objeto de la herencia, ya que legalmente es el legítimo heredero, en este caso, a su entender, los acusadores particulares han fabricado un delito donde no existe. Además, no se acreditará la falsedad sin haberse incurrido en una irregularidad en cuanto al contenido de este acto jurídico.

En cuanto al uso, expresa que tampoco se acreditará en atención a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de nulidad de testamento. El acusado no ha dispuesto de la propiedad, generándole gastos e incluso siendo él el perjudicado.

La causante al momento de testar se encontraba lúcida, constituyendo un mandato para el acusado, para que fuera el quien se hiciera cargo de su enfermedad, advirtiéndose la confianza que le tenía.

Los querellantes no la visitaron y no tenían relación con ella, fabricando un delito para efectos económicos.

**En su clausura**, reafirma que no se acreditó el tipo penal. Entiende que más allá de toda duda razonable, no se ha acreditado que el documento sea falso, el Notario señaló que estuvo con la Sra. Beattie, quien estaba en su sano juicio entregándole el sobre sellado al ministro de fe, quien además refirió que también entregó un mandato general, en pleno uso de sus facultades, explicándole la posibilidad de retracto.

Muchas veces los testamentos cerrados son escriturados por los abogados explicándose el error en los apellidos de los antepasados de la causante, lo mismo con los términos en que estaba redactado

El hecho que el testamento sea cerrado no implica que sea secreto, la señora Beattie manifestó dejarle los bienes al acusado, lo que incluso se refrenda con el entierro de su dama de compañía Laura en el mausoleo familiar.

Refiere el peritaje del Sr. Navarrete, y la mención a los juicios sobre su validez, siendo rechazados los recursos a su respecto, este testamento es válido



hasta el día de hoy; el acusado se hizo cargo de la señora Adriana, incurriendo en gastos, con dineros que provienen de la propia causante, cobrándose un vale vista para su sepultura.

Los testigos acreditan que no contaban con una firma indubitada de la señora Adriana, no puede acreditarse que la falsificación la hizo Patricio Araneda, se formula la interrogante ¿Porque no se hizo la pericia al acusado? No se sabe.

Si se quería adulterar la minuta habría sido más fácil cambiar el beneficiario que la firma, no puede acreditarse que la firma de los cheques sea de la misma mano que la dubitada.

Según entiende, la firma de la señora Beattie tenía una característica especial, la que aborda el peritaje del Sr. Navarrete, referida a un punto bajo la firma, las indubitadas tenidas a la vista en dicho peritaje y la dudosa conservaban el punto. La perito Janira Acuña no vio el punto, su peritaje, además, se acompañó en la causa civil, rechazándose la pericia por no ser creíble por la forma en que se elaboró.

Da cuenta del amplio bagaje del perito José Navarrete, reitera que no se ha acreditado que la firma sea falsa, acompañándose por su parte la cédula de identidad de la occisa, advirtiendo el gran parecido de la firma estampada ahí, con la dubitada.

Finalmente, reitera que no se dan los elementos subjetivos del uso malicioso, el 22 de mayo de 2018 se protocolizó el testamento, el 24 de junio de 2020 quedó ejecutoriada la resolución de la suprema respecto a su validez.

Las mismas pruebas no han acreditado que el acusado haya hecho uso malicioso de este instrumento privado o público (según refiere la fiscalía), el acusado es respetuoso de la justicia y ha incurrido en gastos. Los antecedentes sobre juicios de familia acompañados en el juicio no guardan relación con esta causa, tampoco el tema del vehículo al considerar el mandato. La transacción que acompañó fue enviada por el mismo abogado querellante al acusado, reconociéndose su calidad de heredero.

Tampoco se ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta que se ejerció una presión sobre Adriana Beattie por parte del acusado o que se haya aprovechado de su situación. Cuestiona el hecho que su sobrino Jorge Beattie sólo alcanzó a pagar 3 cuotas del campo que había adquirido de la occisa.

Concluye expresando que no se ha acreditado en qué momento el acusado hizo uso de este instrumento, sólo existe un contrato de arriendo por un mes cuando la sentencia de la Corte Suprema estaba ejecutoriada

La defensa no hace uso de su derecho a **réplica**.

### **DECLARACIÓN DEL ACUSADO**

**SEXTO:** El acusado, hizo uso de su derecho a guardar silencio, no prestando declaración en el juicio.

### **CONVENCIONES PROBATORIAS**

**SÉPTIMO:** Los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

### **PRUEBAS RENDIDAS**

**OCTAVO:** Que, las pruebas de cargo aportadas y rendidas en el juicio oral por el Ministerio Público, y la querellante, consisten en la declaración de los siguientes testigos:

- a) La corredora de propiedades **Claudia Elena Fernández Giner**.
- b) El Notario suplente **Iván Andrés Toledo Mora**.
- c) Los sobrinos de la causante **Jorge Iván Beattie Ainol, Verónica Beatriz Beattie Ainol y Claudia Katerin Beattie Ainol**.
- d) El amigo de la familia Beattie, **José Dúmenes Barría**.
- e) Los funcionarios policiales, **José Pérez Tapia y Mauricio Alejandro Flores Sáez**.
- f) Los garzones del restaurante del Hotel Savoy, **Raúl Alberto Avendaño Saa y René Ulises Vargas Muñoz**.

Además, se contó con los siguientes peritajes:

- a) **Daniel Puentes Pérez**, Sargento 2° de Carabineros, perito documental, quien realizó una pericia referida a la autenticidad de la firma estampada en veinte cheques del Banco Scotiabank.
- b) **Janira Acuña Soto**, perito caligráfico, quien realizó una pericia de la firma cuestionada en la minuta testamentaria.
- c) **Ligia Carolina Cárdenas Ponce**, perito calígrafa y documental, quien realizó una meta pericia del informe pericial de don Ricardo Navarrete.

Se rindió abundante prueba documental, que corresponde a:

- a) **Certificado de avalúo fiscal** emitido con fecha 16 de mayo de 2022 respecto del inmueble ubicado en Avenida Colón N°279, Cerro de la Cruz, Punta Arenas, estableciendo un avalúo fiscal de \$106.362.797.



b) **Certificado de inscripción y anotaciones vigente en el Registro de Vehículos Motorizados** del vehículo P.P.U. PW.3448, en donde se aprecia una transferencia realizada al acusado el 08 de febrero de 2017, una nueva transferencia a Adriana Beattie el 28 de febrero de 2017 y una última nuevamente al acusado el 6 de febrero de 2018.

c) **Certificado respecto del inmueble** de avenida Colón N°279 extendido por Pilar Gómez Traver de fecha 9 de agosto de 2018.

d) **Contrato de arrendamiento** suscrito entre Daniela Soledad Vargas Guzmán y Patricio Araneda Mena con fecha 17 de agosto de 2021.

e) **Conversaciones de WhatsApp** sostenidas entre Patricio Araneda y Claudia Fernández, corredora de propiedades, reconocidas por esta en audiencia.

f) Copia de **escritura pública** suscrita en la Notaría de don Evaldo Rehbein Utreras, protocolizada bajo el N°338 de fecha 22 de mayo de 2018, repertorio 1.197 y respectivos documentos anexos.

g) Copias de la **hoja de ruta de procedimiento** gestado con fecha 22 de febrero de 2017, reconocidas por los funcionarios de Carabineros Sres. Pérez y Flores, advirtiéndose en lo relevante, el procedimiento realizado en Avenida Colón N°279, manifestando doña Adriana Beattie, su intención de sacar de su casa al allegado Patricio Araneda.

h) **Correo electrónico** enviado por José Dúmenes Barría a don José Trigo Aguilera con fecha 3 de septiembre de 2021, reconocido por el testigo en el juicio.

i) **E-Book** del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas con ROL V-29-2018

j) **E-Book** del Juzgado de Familia de Punta Arenas con ROL C-687-2013 y respectivo correo electrónico que lo remite.

k) **E-Book** del Juzgado de Familia de Punta Arenas con ROL C-82-2013 y respectivo correo electrónico que lo remite.

l) **Oficio N°137** de fecha 26 de mayo de 2022 extendido por el Conservador de Bienes Raíces de Magallanes

m) **Oficio N°866** de fecha 13 de diciembre de 2018 remitido por la 1° Comisaría de Carabineros de Punta Arenas.

n) **Oficio S/N°** de fecha 1 de julio de 2019 suscrito por Horacio Silva Reyes.

ñ) **Ordinario N°166/2022** de fecha 29 de junio de 2022 remitido por el Administrador (S) del Cementerio Municipal "Sara Braun" y sus respectivos documentos adjuntos.



o) **Ordinario N°17754** de fecha 19 de diciembre de 2018 y los respectivos documentos que remite.

p) **Ordinario N°183** de fecha 23 de junio de 2022 que remite lo que indica extendido por la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y respectivos documentos adjuntos, referidos a las solicitudes de obtención y renovación de la licencia de conducir de la señora Adriana Beattie Silva.

q) **Certificados de nacimiento** de Jorge Iván Beattie Ainol, Verónica Beatriz Beattie Ainol, Federico Manuel Beattie Silva, y Adriana Vanesa Beattie Silva, extendidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

r) **Certificado de defunción** de Adriana Vanesa Beattie Silva, extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

La agregada por el querellante, correspondiente a:

s) **Seis videos** tomados a los cheques originales números de serie N°0198533, 0198539, 0198541, 0198542, 0198543, 0198544, 0198545, 0198546, 0198547, 0198548, 0198549, 0198550, 0198551, 0198552, 0198553, 0198554, 0198555, 0198556, 0198557 y 0198558, en dependencias del Labocar, incorporado al peritaje de Janira Acuña Soto de 25 de octubre de 2023.

t) **Dos videos** tomados a la firma dubitada en el Archivo Judicial de Punta Arenas, incorporado al peritaje Janira Acuña Soto, de fecha 25 de octubre de 2023.

u) **E-book** actualizado de la causa rol C 936-2021 del 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas

v) **E-book** Recurso Revisión Excma. Corte Suprema Rol 3146-2022.

w) **Oficio N°2270-2022** de 12 de julio de 2022, instrucción particular para permitir a perito Janira Acuña acceder a cheques en poder del LABOCAR.

x) **Currículo y antecedentes** profesionales y de experiencia de la perito Janira Acuña Soto.

y) **Currículo y antecedentes profesionales** y de experiencia del perito Ligia Carolina Cárdenas Ponce.

La evidencia material, correspondiente a:

a) **20 cheques** Banco Scotiabank de la cuenta corriente de doña Adriana Beattie incautado con el N.U.E. 5231845.

b) **Carpeta de la dirección de tránsito** a nombre de Adriana Beattie con varios documentos en su interior incautada mediante el N.U.E. 5238956.

La defensa por su parte, además de hacer suya las probanzas de cargo ya mencionadas, aportó prueba testimonial, consistente en las declaraciones de:

- a) **Cenia Gospodneteic Tafrá**, amiga de doña Adriana Beattie.
- b) **Erick Alejandro Peruzovic Vidal**, amigo del acusado Patricio Araneda.
- c) **Eduardo Mercado Alvarado**, amigo del acusado y testigo en el otorgamiento del testamento cerrado.

d) **Ricardo Antonio Navarrete Pardo**, perito documental en la Policía de Investigaciones de Chile, quien declaró respecto del informe que emitió en octubre de 2019 en causa civil sobre nulidad de testamento.

La defensa, asimismo, rindió prueba pericial, consistente en los informes de:

- a) **Jaime Sandoval López**, Sargento de Carabineros, perito documental, quien declaró respecto al informe pericial N°68-2022.
- b) **Jonathan Venegas Fierro**, Capitán de Carabineros, sección Criminalística, quien se refirió a la ampliación o complementación del informe N°68-2022.

Finalmente, acompañó prueba documental, consistente en:

- a) **Oficio N°268** de 19 de julio de 2023 de Sección Criminalística LABOCAR, que señala que no se realiza el informe por no ser las muestras indubitadas coetáneas, homólogas, suficientes ni equi circunstanciales.
- b) Copia de la **cédula de identidad** de doña Adriana Beattie Silva.
- c) Copia de **sentencia definitiva en causa sobre nulidad del testamento** de doña Adriana Beattie Silva del segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas rol C-1503-2018, caratulada Beattie con Araneda.
- d) **E-book de la causa C-1503-2018**, sobre nulidad de testamento, seguida en el 2° Juzgado Civil de Punta Arenas.
- e) Copia de **Escritura Pública** suscrita en notaria de don Evaldo Rehbein Utreras, protocolizada bajo en N°338 de fecha 22 de mayo de 2018, Repertorio 1.197 y respectivos documentos anexos.
- f) Copia de **Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas Rol 195-2020 Civil**, conociendo de los recursos de casación en la forma y





apelación de la sentencia dictada en la causa C-1503-2018, rechazando la casación y confirmando la sentencia de 1° instancia.

g) **E-book de la Excma. Suprema** que contiene copia de sentencia de la primera sala de dicho tribunal en causa Rol N°14.558-2021, de fecha 30 de julio de 2021.

h) Copia de **sentencia del Tribunal Constitucional** en causa rol N°12.930-2022, conociendo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases que se indican del inciso primero segundo y tercero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, interpuesto por Jorge Beattie Ainol, Claudia Katherine Beattie Ainol y Verónica Beatriz Beattie Ainol.

i) Copia de la **licencia de conducir** de doña Adriana Beattie Silva, cuya fecha de otorgamiento corresponde al 12 de enero 2004.

j) **Borrador de cesión de derechos hereditarios, liquidación de comunidad desistimientos, finiquito, renuncia de acciones y derechos y mandatos irrevocables.** enviados por las víctimas de los hechos de esta causa a mi representado, documento en formato Word, sin firma de ningún tipo.

k) **Informe caligráfico** realizado en la causa C-1503-2018, del Segundo Juzgado de Punta Arenas, realizado por el testigo Ricardo Navarrete, perito caligráfico designado por ese Tribunal, al testamento cerrado objeto de los hechos de esta causa.

### **HECHOS PROBADOS**

#### **NOVENO:**

De acuerdo con las pruebas mencionadas anteriormente pueden establecerse como probados los siguientes hechos:

**1° Doña Adriana Vanesa Beattie Silva, nació el 17 de abril de 1945, falleciendo el 7 de febrero de 2018, siendo su hermano Federico Manuel Beattie Silva (fallecido), padre de Verónica Beatriz Beattie Ainol, Jorge Iván Beattie Ainol y Claudia Katerin Beattie Ainol.**

Esto se desprende de los certificados de nacimiento y defunción acompañados, emitidos por el Registro Civil e Identificación.

**2° Al momento de su fallecimiento, sus únicos herederos legales eran sus sobrinos Verónica Beatriz Beattie Ainol, Jorge Iván Beattie Ainol, y Claudia Katerin Beattie Ainol, al no dejar descendientes con mejor derecho. Dentro de sus bienes, se encontraba el inmueble ubicado en Colón N°279,**

**con sus enseres y el vehículo P.P.U. PW.3448, además de los derechos que le correspondían en el mausoleo familiar.**

Los documentos mencionados anteriormente, emitidos por el Servicio de Registro Civil, comprueban lo anterior, se desprende que, sin la existencia de un testamento, los sobrinos de la señora Beattie habrían heredado de acuerdo con el cuarto orden sucesorio según las reglas de la sucesión intestada.

El Certificado respecto del inmueble de avenida Colón N°279 extendido por Pilar Gómez Traver de fecha 9 de agosto de 2018 da cuenta del dominio de dicha propiedad; el Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo P.P.U. PW.3448 nos ilustra respecto del dominio de dicho bien.

Además de lo anterior, se cuenta con los testimonios de Verónica Beatriz Beattie Ainol, Jorge Iván Beattie Ainol y Claudia Katerin Beattie Ainol, quienes latamente describieron la historia familiar y la vida de su tía, testimonios creíbles en atención a la relación que los unía y el conocimiento acabado que tenían de su vida.

**3° El acusado prestaba servicios para la causante, consistentes en transportarla, realizar compras, trámites, entre otros, viviendo en una casa construida en el patio trasero de la propiedad de doña Adriana Beattie, ubicada en la calle Colón 279, propiedad cuyo avalúo fiscal asciende a \$106.362.797.**

Lo anterior se acredita por las declaraciones de Jorge Iván Beattie Ainol, Verónica Beatriz Beattie Ainol y Claudia Katerin Beattie Ainol, los tres contestes en las labores que realizaba el acusado para su tía, mientras ella vivía.

Así, el primero fue claro en señalar que: *«El acusado trabajó durante muchos años con su familia, estuvo a cargo de su tía en el último tiempo. Lo conoce desde el 2000, prestó servicios para la familia, tuvo un taxi, trabajaba con ese taxi, haciendo compras, acarrea a su tía, etc. Sobre 20 años hizo eso»*. Luego, la segunda deponente refiere que: *«El acusado era el taxista de la tía, le ayudaba en las cosas de la casa, prestaba servicios en la Familia, su padre igual vivió en Colón, puertas afuera por lo general, cuando falleció su padre y su tío fue a vivir a la casa que ellos construyeron, para que estuviera con la tía, vivía con su pareja...»*. Finalmente, la última señala que: *«...Lo conoce (al acusado) hace 10 años, cuando visitaba a su tía en Colón, era conductor, su tía le pagaba para*

*hacer los quehaceres era junior, estafeta...». Luego, describe la casa nueva donde vivía su tía, y agrega: «...y además hay otra atrás del patio que construyó su tía para poder facilitar alguna persona a cargo del cuidado de su tía, se conversó con su padre sobre eso, esa casa se la pasó al Sr. Araneda, él la habitó en compañía de su expareja que prestaba servicios en los quehaceres del hogar...».*

A los dichos anteriores, debe añadirse el testimonio de José Dúmenes Barría, quien señala que *«Ella tenía apoyo del acusado, estaba en la casa constantemente, lo conoce unos 15 años, estuvo en su casa en una oportunidad. Constantemente Adriana llamaba a Patricio para que le hiciera los mandados en el taxi. Adriana lo cobijó en su casa en una oportunidad, más adelante construyeron una casa al fondo y él se fue a vivir ahí con una señora, estuvo con ellos».*

Finalmente, el hecho que el acusado vivía en una casa construida en el patio trasero de la propiedad de Colón N°279 también se desprende del relato de los funcionarios policiales José Pérez Tapia y Mauricio Flores, que concurrieron a un procedimiento el día 28 de enero de 2017, señalando el primero que *«...la señora Adriana mantenía un inconveniente con el arrendatario de la parte de atrás del inmueble (...) En el patio estaba la casa interior, los inconvenientes eran de convivencia, ella no expresó mayormente, el sobrino que llegó después le indicó que el acusado vivía hace bastante tiempo ahí, que la señora le facilitó la parte posterior, él llegó después»*, luego, el segundo precisó que *«...se entrevistaron con Adriana Beattie, señora de la tercera edad que tenía un problema con quien estaba en la parte posterior de su propiedad Patricio Araneda (...) La casa principal era la vivienda de la señora y atrás estaba como su cuidador».*

Como se advierte, existen numerosos testimonios de primera fuente que acreditan los elementos fácticos anteriormente descritos, las declaraciones son creíbles, contestes y tienen concordancia entre ellas.

El Certificado de avalúo fiscal emitido con fecha 16 de mayo de 2022 respecto del inmueble ubicado en Avenida Colón N°279, Cerro de la Cruz, Punta Arenas da cuenta del valor de la propiedad.

**4° El Vehículo Mitsubishi Montero, P.P.U. PW.3448, de propiedad de la señora Adriana Beattie, fue transferido el 8 de febrero de 2017 al acusado, lo que ocasionó un incidente entre ellos, concurriendo funcionarios de Carabineros el 28 de enero de 2017 al domicilio de Colón N°279, momento en**



**el que la señora Beattie, les manifestó su deseo de que Patricio Araneda hiciera abandono del inmueble que habitaba en la parte trasera de dicho inmueble.**

**El acusado volvió a transferir el vehículo a la señora Beattie el 28 de febrero de 2017, y finalmente lo adquirió nuevamente, registrándolo a su nombre el 6 de febrero de 2018, esto es, un día antes del fallecimiento de la Sra. Beattie.**

Estos hechos se deprenen de la simple lectura del certificado de inscripción y anotaciones vigentes ya referido, documento oficial que da cuenta por sí solo de estos hechos, pero además se cuenta con la hoja de ruta de procedimientos, agregada como documental y reconocida por los funcionarios policiales Sres. Pérez Tapia y Flores, cuyos testimonios, en lo que dicen relación con este punto señalan, el primero, que: «...la señora Adriana mantenía un inconveniente con el arrendatario de la parte de atrás del inmueble (acusado) le señalaron que el desalojo se hacía por el tribunal civil, fue a hablar con patricio acompañado de una mujer, le explicaron que la señora Adriana (lúcida-70 años) quería que se fuera del inmueble, prontamente iba a hacer abandono del inmueble, llegó un familiar de la señora, y reconoció los inconvenientes, decía que Patricio se aprovechaba de la voluntad de la señora». El segundo, que: «...era funcionario conductor del cuadrante 1, se entrevistaron con Adriana Beattie, señora de la tercera edad que tenía un problema con quien estaba en la parte posterior de su propiedad Patricio Araneda, quería que se fuera de la propiedad porque tenían malos comportamientos con ella y le había pedido días antes, tenía un vehículo Mitsubishi Montero PW3448, él quería que lo pusiera a su nombre, el manifestó que lo iba a regresar a la señora.

*Le indicó que el trámite era judicial (el sacarlo de la propiedad), el procedimiento lo hizo con el teniente Pérez Tapia, jefe del turno.*

*Él se entrevistó personalmente con la señora, quien estaba ofuscada y molesta. Intranquila con la situación».*

A lo anterior se une el testimonio de los sobrinos de la occisa, quienes refirieron el altercado producto de la transferencia del vehículo, en especial Jorge Beattie, quien concurrió ese mismo día al domicilio, relatando que «...En cuanto al incidente, pasó el 2017, estaba en la ciudad, su tía lo llamó a las 18.00 horas para contarle que Araneda la había golpeado, estaba en estado de shock y

*desesperada, llamó a Carabineros y fue a la casa. Ella le dijo que el acusado la empujó, ella lo fue a increpar a la casa y el la empujó fuera de la casa. Se originó por el tema del auto, al ir a almorzar le contó que estaba programando un viaje para Chiloé para que Patricio la acompañara, llevarían a su señora, le dijo que había ido a la notaría porque tenía que haber ido a hacer la transferencia del vehículo a nombre del acusado para el viaje.*

*Ella le pidió que lo consultara y le dijeron que no era necesaria la transferencia, le comentó a su tía y quedó en eso. Ella reaccionó molesta, se sintió engañada.*

*Su tía le dijo que quería que se fueran de su casa el acusado y su señora, y que quería el jeep de vuelta, él fue a hablar con el acusado con Carabineros quienes lo conminaron a devolver el vehículo y retirarse del domicilio.*

*El día antes del fallecimiento de su tía (insuficiencia respiratoria por cáncer al pulmón) el acusado el 6 fue a hacer la transferencia del jeep a su nombre, y la inscripción al Registro Civil, fue al banco a cerrar la cuenta corriente, por lo que el mintió al decir que estuvo cuidándola».*

Cabe mencionar que los propios funcionarios policiales reconocieron su presencia en el domicilio de la señora Beattie el día indicado.

Don José Dúmenes también refiere este impasse en su testimonio, expresando: «Lo llamó una amiga en común (Celia), a Patricio lo están echando porque empujó o agredió a la Adriana, el sobrino le está pidiendo la casa».

**5° El día 19 de junio de 2017 la causante concurrió a la Notaría de Punta Arenas, del titular de ese entonces Evaldo Rehbein Utreras, servida por el suplente Iván Toledo Mora, momento en el cual, ante la presencia de testigos, doña Adriana Beattie dejó testamento cerrado ante el Notario actuante, entregando un sobre cerrado y firmando una carátula frente al ministro de fe y los testigos Luis Enrique de la Latorre Santana, Eduardo Andrés Mercado Alvarado y Ana María Vladilo Rizzo, cuyo contenido no se hizo saber en dicho momento apareciendo 4 firmas, la de la testadora y de los 3 testigos. La causante se presentó con sus facultades mentales normales, otorgando, además, en dicha oportunidad un mandato general al acusado Patricio Araneda Mena.**

Para estos efectos, se cuenta con el propio documento testamentario, comprendiendo la minuta y carátula, y con la declaración del Notario suplente



TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUNTA ARENAS

actuante Iván Toledo Mora la que resulta trascendental, dándose cuenta del trámite realizado y la firma de la carátula ante él y los testigos, en efecto, el ministro de fe señala que: *«...el 2017 la señora Beattie concurre a la notaría para otorgar testamento cerrado con testigos, se recibe con las solemnidades del caso, y con posterioridad a la apertura este fue impugnado por vía civil y penal, desconoce los motivos, pero el recibió el testamento cerrado»*.

Si bien el testamento y su carátula unido al testimonio del ministro de fe resulta suficiente para acreditar lo anterior, además se contó con la declaración del propio testigo de la defensa, Sr. Mercado, quien refirió el proceso de otorgamiento de dicho documento al haber participado en el acto.

**6° El testamento cerrado se abrió ante el 1° Juzgado Civil de esta ciudad el 22 de mayo de 2018, llevándose a efecto la audiencia de apertura ante el magistrado, en causa V-29-2018, oportunidad en que el Notario Evaldo Rehbein Utreras hizo entrega de un sobre cerrado, lacrado. Se procedió a abrir el sobre, se dio lectura al testamento y se ordenó su protocolización, la que se practicó en el Registro de Instrumentos Públicos, de 22 de mayo de 2018, con el N° 338, Rep. 1197, de la Notaría de Evaldo Rehbein Utreras.**

El testamento consta de 3 hojas de papel blanco, impresas en tinta, por el anverso, por tanto, no es un texto manuscrito por la testadora, y presenta como primera particularidad que está en blanco el día del mes de mayo de 2017 en que la testadora lo otorgó. Presenta, además, errores ortográficos, por ejemplo, en la cláusula “PRIMERO: ... y estar domiciliado...”; además, en el texto existe un error en la enunciación de los apellidos de ambos padres de Adriana Beattie: dice ser hija de don Jorge Beattie Wolker (se escribe Walker) y de doña Blanca Uvara Silva Bonnad (se escribe Bonnand).

En el testamento cerrado doña Adriana Beattie Silva designó heredero universal de todos sus bienes a Patricio Araneda Mena, nombrándolo además albacea con tenencia y administración de bienes.

Esto se acredita con las copias pertinentes del E-book de la causa V-29-2018 del 1° Juzgado Civil de esta ciudad, y las declaraciones de Verónica Beatriz Beattie Ainol, Jorge Iván Beattie Ainol y Claudia Katerin Beattie Ainol además del propio testamento, incluido en los autos ya mencionados. En lo medular, el



instrumento en cuestión establece que la voluntad de la testadora es «...*instituir como heredero universal de todos mis (sus) bienes a don Patricio Antonio Araneda Mena*», designándolo, además, como albacea con tenencia y administración de bienes, con cargo a los bienes que heredará.

**7° Se siguió una causa por nulidad del testamento ente el 2° Juzgado Civil de esta ciudad, causa C-1503-2021, en la que, por sentencia de 24 de julio de 2020, se rechazó la demanda sin costas, rechazándose el recurso de casación en la forma y confirmándose este fallo, por sentencia de 4 de febrero de 2021 emanada de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, desestimándose, a su vez, el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de esta última sentencia, por fallo de 30 de julio de 2021 de la Excma. Corte Suprema en causa 14.558-2021 al haberse declarado inadmisibile.**

Lo anterior se acredita con las piezas de los expedientes electrónicos tenidos a la vista, cuyos roles ya fueron señalados.

**8° Posteriormente se presentó un recurso de revisión ante este último tribunal, suspendiéndose el procedimiento el 22 de febrero de 2022.**

El E-book N°3146-2022 de la Excma. Corte Suprema acompañado acredita lo anterior.

**9° La firma estampada en el testamento no corresponde a la causante doña Adriana Beattie Silva, siendo en consecuencia, falsa.**

Resultan particularmente clarificadores en este sentido los peritajes realizados por Janira Acuña Soto, Daniel Puentes Pérez y el metaperitaje de Ligia Cárdenas Ponce, en efecto, y sin perjuicio que se volverá sobre este punto, la firma estampada en la minuta del testamento cerrado difiere sustancialmente de la rúbrica de doña Adriana Beattie Silva.

Según la primera perito, «...*llegó a la conclusión que la firma es falsa del tipo servil ejercitada*», esto en sus propias palabras «...*implica que la persona practica varias veces hasta que de acuerdo con su propio criterio la realiza de forma óptima*». En efecto, se puede advertir, y se explicó en el peritaje, que existen marcadas diferencias entre la firma indubitada de la causante, y aquella que se contienen en el testamento, así, esta profesional expone: «*Se realizó un desglose de análisis de barrido y hallazgos encontrados referidos al arranque, óvalo, fragmentación, el tamaño de las letras “tt”, el arco sobre letra “B”.*»

*Se aprecia en las firmas indubitadas, un arpón -que corresponde a la punta que se observa al inicio de la escritura- al inicio de la letra B, en la dubitada del testamento dicho arpón no se presenta. Luego, en lo referido al óvalo, en la letra “a” la señora Beattie utiliza un collage, -que corresponde a efectuar un trazo de la letra a, levantar el lápiz y redondear-, en la firma dubitada nunca se levanta el lápiz, lo que es extraño en el patrón de firma. Respecto a la fragmentación, en la primera letra “t” se advierte un levantamiento de lápiz, lo que no se advierte en el patrón de escritura de la Sra. Adriana. Referido al tamaño, las letras “tt” siempre son paralelas, en la dubitada no lo son, ya que una está más abajo que la otra, en las firmas no cuestionadas es un solo travesaño, cuyo punto de arranque va de izquierda a derecha, esto es un patrón de escritura, pero en la firma dubitada el travesaño está escrito de derecha a izquierda, al contrario, está apoyado desde ese lado al principio. En cuanto al arco, la firma indubitada contiene una rúbrica envolvente, en la dubitada llama la atención los rastros del soporte (papel) ya que se ve como si se hubiese intervenido, los surcos no son limpios, hay lentitud en la ejecución, se encuentra además un surco sin tinta con el equipo utilizado». Como se indicó, y a propósito de la postura de la defensa, se analizará con mayor detalle este informe pericial, aunque es dable destacar que la perito informa que: «Existen diversas clasificaciones de falsedad de firma, el que sea Servil ejercitada implica que la persona practica varias veces hasta que de acuerdo con su propio criterio la realiza de forma óptima».*

*La profesional realizó además un «Análisis grafométrico, en donde se advierte angulación de las firmas indubitadas, ellas tienen un ángulo de escritura entre 84,5° y 86°, ella -la señora Beattie- siempre se mueve en ese patrón de movimiento, pero en la firma dubitada el patrón es de 78°, alejándose del espacio del abanico que predominantemente presentan las firmas indubitadas».*

*La conclusión de la falsedad de la firma también se desprende del peritaje del Sr. Puentes, quien concluye que «Es posible advertir que en las firmas rotuladas como E-2 (minuta testamentaria) y E-3 (carátula del testamento) se utilizó un elemento esferográfico de tinta pastosa de color azul, sin embargo, existe disímil idea de construcción y trazado conforme a su composición». Este perito añade que «Las firmas mantenían en tiempos de construcción en 6 tiempos (enlaces o unión de cada firma), la diferencia es en la habilidad, en una mayor habilidad y en la otra no, ya que hay “temblorosa” en su confección E-2 no tenía*

*la misma habilidad, se ve en el trazo y en la ornamentación de la firma, hay un disímil de ideas de confección entre las dos».*

Finalmente, y sin perjuicio que se abordará con posterioridad, se puede concluir que el peritaje realizado en sede civil por el Sr. Ricardo Navarrete, no cumplió estándares científicos mínimos para llegar a la conclusión contraria, esto es, que la firma de la minuta testamentaria correspondía a la señora Adriana Beattie; esto se puede advertir claramente de su propia lectura, de la declaración entregada por el señor Navarrete como testigo, y por sobre todo, por el informe pericial realizado por la perito Ligia Cárdenas, que refiere concluyentemente que: *«...arribó al dictamen que el informe caligráfico no sirve de apoyo para el juez ya que tiene inconsistencias y omisiones relevantes, el dictamen no se corresponde con la metodología que debería haber seguido y por ende presenta inconsistencias en su conclusión».*

**9° El acusado, participó en las ceremonias fúnebres de la señora Adriana Beattie, manifestándole al sobrino de la occisa, Jorge Beattie Ainol que “no se preocupara de nada, ya que él era el heredero de todo”. Con posterioridad, continuó viviendo en el domicilio de la parte trasera de Colón N°279, arrendando la casa del frontis que habitaba doña Adriana Beattie, el 17 de agosto de 2021 en la suma de \$700.000 mensuales, contrato que duraba hasta el 17 de septiembre de dicho año.**

Lo anterior es referido por el testigo Jorge Beattie Ainol, cuyos dichos, a juicio del tribunal, se corresponden con las restantes evidencias al respecto, siendo contestes además sus hermanas en señalar que el acusado actuaba como “maestro de ceremonias” en el velorio de la señora Beattie, desprendiéndose que mantenía a esa fecha, conocimiento del contenido del testamento cerrado, como lo refirió incluso el testigo de la defensa Sr. Mercado, quien refirió haber llamado al acusado tras la apertura del testamento, manifestándole este que “ya sabía” que era el heredero.

Resultan ilustrativos de lo anterior, los dichos del Sr. Beattie, quien expuso que el día del funeral de su tía: *«...(Patricio) Araneda estaba ahí, él le dijo los pormenores y le consultó por los gastos, ella (su tía) vivía con dinero que él le daba (\$800.000) y una jubilación (anualmente 20.000 dólares) El (acusado) le dice que está todo cancelado, él hacía los trámites, que no hiciera nada porque había un testamento que lo nombraba dueño de todos los bienes».* Este testimonio es

refrendado por el de doña Verónica Beattie, quien al respecto declaró que: «Vino a Punta Arenas para el velorio, su hermano le dice que el acusado le menciona que no se preocupe de nada, le dijo el mismo día que hay un testamento y que él era el dueño de todo.

Van a la casa, y él (acusado) dijo “ahora yo soy el dueño de todo”, se les prendió la alerta del porqué decía eso, porque ellos eran los herederos, del mausoleo incluido, ese mausoleo jamás lo hubiera dejado, ya que ahí están sus familiares más cercanos, no entendían porque se había dejado un testamento cerrado...». Finalmente, Claudia Beattie expone los mismos hechos: «...Fue a la capilla, estaba el acusado, sintió que estaba disfrutando, se acercó Jorge por los gastos para reembolsar y el acusado le dijo que no se preocupara que todo estaba pagado, hizo un comentario fuera de lugar a Jorge “no se preocupen como sobrinos de realizar ningún trámite porque él es el heredero de todo, su tía le había dejado un testamento”, Jorge les comento a ella y su hermana.

Al día siguiente continuó el velatorio, su actitud (del acusado) la sorprendió ya que era poco habitual en este tipo de situaciones, era como un “anfitrión”, se veía contento».

Además, se acompañó el contrato de arriendo, un pantallazo de whatsapp entre el acusado y la corredora de propiedades (reconocidos por ella) y la declaración de la propia corredora Claudia Elena Fernández Giner, quien manifestó que: «Conoció al acusado porque trabajaba de chofer para la señora Beattie, cuando falleció se acercó a ella para que le arrendara la casa que había heredado, de la Sra. Nanny Beattie, quien era tía de una amiga suya».

Se aprecia que, además de los dichos de los sobrinos de la occisa, la corredora de propiedades, tercera extraña a la disputa referida a la sucesión de la señora Beattie, expresa la actitud del acusado en el mismo sentido; por lo demás, es un hecho acreditado y no discutido que Patricio Araneda, con posterioridad al fallecimiento de la señora Beattie, continuó viviendo en el inmueble de avenida Colón N°279, siendo lógico entender que tenía conocimiento de que tenía un título para continuar ocupando dicho inmueble, sin dejar ingresar a los sobrinos de la fallecida, quienes fueron claros y tajantes en señalarlo.

**10° La relación de la fallecida señora Beattie con sus sobrinos, en especial con su sobrino Jorge Beattie Ainol, era muy buena y cercana, no apreciándose animadversión entre ellos, manteniendo contacto constante**

**vía telefónica o presencial cuando el Sr. Beattie se encontraba en la ciudad de Punta Arenas.**

Incluso sin considerar la propia declaración de Jorge Beattie, lo anterior se desprende de la declaración de los garzones Sres. Raúl Alberto Avendaño Saa y René Ulises Vargas Muñoz, declarando el primero que «...iban a comer al Hotel hace 12 años aproximadamente, iban todos los domingos, los dos, a veces días de la semana en una mesa específica, frente a la barra en el comedor pequeño.

*Don Federico, papá de don Jorge, era amigo del dueño del Hotel, los empezó a atender, muchos años, ya sabía lo que comían y tomaban, almorzaban solos los domingos, en la semana iban con más gente.*

*La relación era muy buena, cuando los empezó a atender pensó que era su mamá, después conversaba con ellos, había “buena onda” entre garzón y cliente*

*Dejó de ver a doña Adriana a mediados de 2017, dejaron de ir...».*

El segundo deponente, por su parte, manifestó que: «Él está citado porque la tía y el sobrino que atendía en el hotel, en el restaurante, don Jorge y su tía (Beattie), ellos iban al restaurante como clientes, él trabaja en el Hotel Savoy hace 21 años, como garzón 6 días siempre está en el restaurante.

*El los conoce, porque frecuentaban el restaurante, dos o tres veces al mes iban a comer, Jorge Beattie no sabe la edad, la señora Adriana era adulta mayor de 70 años aproximadamente.*

*El los vio yendo al restaurante 6 o 7 años atendiéndolos, otro garzón los atendía frecuentemente junto con él, pero generalmente él.*

*Veía una buena relación por lo que él sabe, conversaban mucho, se veía que tenían “buen feeling”, siempre los vio a los dos, pero a veces llegaba el tío de Jorge Beattie, el hermano de la señora».*

También para acreditar esta cercanía se cuenta con el testimonio del amigo de la familia Sr. José Dúmenes, plasmado también en el correo electrónico reconocido por él, los dichos de las restantes sobrinas Beattie, e incluso con el testimonio de la testigo de la defensa Sra. Cenia Gospodneteic Tadra, quien le indicó al tribunal que: «...con el sobrino se llevaban muy bien, salían a comer, pero después de un tiempo cambió la actitud a favor de Patricio, cambió la forma de pensar, no sabe bien por qué».

Abordaremos la postura de la defensa al respecto en un acápite posterior.

### **CUESTIONES JURÍDICAS PREVIAS**

**DÉCIMO:** En primer lugar, se debe determinar la calidad del documento cuyo uso malicioso se acusa por el Ministerio Público y la querellante. Al respecto, resulta un hecho incuestionable que el documento en cuestión es un testamento cerrado, otorgado en conformidad con las disposiciones del Código Civil, y abierto siguiendo el procedimiento correspondiente.

El instrumento público está contenido en el artículo 1699 del Código Civil, dicha norma lo define como, «...*el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario*». Luego, el testamento cerrado es un acto complejo, como se desprende del artículo 1023 de este cuerpo legal, que establece: «*Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos.*

*El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador.*

*El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.*

*Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.*

*El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del otorgamiento.*

*Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos, y por la firma y signo del escribano, sobre la cubierta».*

Como se ve, este instrumento se compone de dos partes, a saber, el testamento en sí, que contiene la voluntad del testador y el sobrescrito o cubierta - también llamada carátula- que es donde el escribano expresa las menciones legales del inciso 5° de la norma transcrita.

Luego, si existe alguna duda al respecto de la naturaleza del documento en cuestión, esta podría apuntar al hecho que el contenido del testamento no se otorga ante el funcionario competente, sino que solamente la cubierta, sobrescrito



o carátula, por lo que podría no ser considerado un instrumento público. Pues bien, esta duda es despejada de dos formas.

La primera, dice relación con el hecho que, como se dijo, el testamento cerrado es un acto complejo, compuesto de dos documentos, el testamento propiamente tal y su cubierta, no existiendo duda que esta última es un documento autorizado con las solemnidades legales ante funcionario competente, subsumiéndose su contenido en este concepto, en atención a la indivisibilidad del testamento, ya que, cabe recordar que sus disposiciones pueden ser divisibles, mas no así el documento considerado como un todo, de manera tal, que no puede considerarse el testamento como en parte instrumento público y en parte instrumento privado.

En segundo lugar, el testamento cerrado debe ser protocolizado, una vez abierto en forma legal. En el presente caso, se cumplió con estos requisitos, por lo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 420 N°1 del Código Orgánico de Tribunales, este documento vale como instrumento público.

Además de lo anterior, la doctrina y jurisprudencia nacional han sido concordantes al considerar que el concepto penal de instrumento público, es más amplio que aquella definición civil que entrega el código de Bello en su artículo 1699 ya mencionado, en efecto, se incluye dentro del concepto de instrumento público en el ámbito penal a los denominados “documentos oficiales”, que corresponden a aquellos en los que la intervención de un funcionario público no se limita a su otorgamiento, pero que la requieren en algún momento para ser expedidos o surtir algún efecto.

En este sentido, se cuenta con abundante doctrina nacional, así, incluyen el concepto de instrumento oficial al de instrumento público Alfredo Etcheberry en su obra “Derecho Penal, Parte Especial Tomo IV; Luis Emilio Rojas en su publicación sobre “Falsedad documental como delito de engaño”, Balmaceda Hoyos en su “Manual de Derecho Penal”, Mario Garrido Montt en “Derecho Penal” 4ta parte especial, Tomo IV, pags. 59, 60, entre muchos otros. En síntesis, esta postura ampliamente mayoritaria expresa que *«el instrumento público no está limitado al artículo 1699 del Código Civil, siendo extensible dicho concepto a los denominados “documentos oficiales»*.

Resulta indudable, a juicio de este tribunal, que el testamento cerrado debe necesariamente contar con la participación de un funcionario público -en este caso



un notario, y posteriormente un juez- para poder ser otorgado y luego abierto, por lo que a su respecto, no cabe duda la calidad de instrumento oficial que, a su vez, constituye un instrumento público para efectos penales, al tener que ser considerado como un todo y requerir de la participación de funcionarios públicos en el momento de su otorgamiento y apertura.

**UNDÉCIMO:** Que, despejado lo anterior, resulta necesario establecer el concepto de “uso” que establece el tipo penal a estos hechos.

En efecto, el legislador penal asimiló el uso de un documento falsificado a su falsificación propiamente tal, como lo establece el artículo 196 del Código Penal: *«El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad»*. No existe duda alguna en relación que un particular puede ser sujeto activo de esta conducta, no limitándose este tipo penal al funcionario público ante el cual se otorga o que participa en su otorgamiento, como sí podría entenderse de ciertos tipos de falsificaciones propiamente tales.

El verbo rector en este ilícito consiste en usar el documento falso, emplear su contenido, sin requerir mayor actividad, entendiendo al uso en su sentido natural u obvio, es decir, hacer servir una cosa para algo (primera acepción del término “usar” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), cabe señalar que este uso, en el caso de un documento, no resulta ser una utilización material, como sería utilizar el papel para escribir un número, en cuyo caso la conducta es atípica, sino que es un empleo de lo que contiene dicho documento.

Debe considerarse que el uso en el caso del testamento cerrado puede producirse antes de su apertura, toda vez que es factible usar este tipo de documento atribuyéndose la calidad de heredero, utilizando o disponiendo de los bienes que componen la masa hereditaria o realizando actos jurídicos sobre ellos, entre otras acciones que apuntan a la utilización de este acto jurídico.

Dentro de los elementos subjetivos del tipo, encontramos que se requiere que esta utilización debe ser maliciosa, es decir, con conocimiento de la falsedad de dicho instrumento, no siendo punible el uso por quien desconoce el origen simulado de aquél.

### **CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS DESCRITOS**

**DUODÉCIMO:** Despejados los elementos anteriores, encontramos que los hechos acreditados, y expuestos previamente, a juicio del tribunal configuran el delito de USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en los artículos 194 y 193 N°1 y 2, del Código Penal, en relación con el artículo 196 de dicho cuerpo legal.

En lo que dice relación con el primero, la norma establece que *«El particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.»*. Luego, los números 1 y 2 del artículo precedente establecen que *«Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:*

*1.º Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.*

*2.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.»*

Finalmente, el artículo 196 señala: *«El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad»*.

Como se ve, de la conjunción de normas, y en relación con los hechos acreditados en este juicio, la conducta sancionada en este caso se corresponde en lo medular, con la descrita en las acusaciones fiscal y particular, la que a su vez está en concordancia con aquella establecida en los elementos fácticos que el tribunal tuvo por probados.

En efecto, para tener por configurado este ilícito, en primer lugar, cabe mencionar que resultó probado que la firma contenida en el interior del sobre que contenía el testamento de doña Adriana Beattie Silva es falsa.

Sin entrar aún al contenido mismo del documento, es decir, a lo que dicen sus disposiciones o la forma en las que están redactadas, lo esencial para determinar su autenticidad o falsedad corresponde a determinar si la firma estampada en su tercera hoja correspondió a doña Adriana Beattie o bien fue hecha por un tercero.

La fiscalía y la querellante sostuvieron que la firma no fue estampada por la señora Beattie, y por su parte, la defensa afirmó que doña Adriana fue la que, manifestando su voluntad de dejar todos sus bienes al acusado, estampó su firma en dicho documento.



Para sostener la falsedad de la firma y como ya fue referido, se contó en especial con tres peritajes, dos de ellos referidos a la firma en cuestión y uno de ellos a la validez del peritaje evacuado en sede civil que concluyó en su oportunidad que esta firma era de la occisa.

El peritaje de doña Janira Acuña, cuyas credenciales fueron acompañadas por los querellantes, y que impresionan por su extensión y credibilidad, concluye fehacientemente que la firma es falsa, en atención a diversos criterios técnicos que fueron latamente explicados por la profesional al momento de evacuar su informe, en efecto, pasaremos a analizar los criterios más importantes y que permitieron al tribunal formarse la convicción de la falsedad de la firma que se estampó en el documento objeto de este juicio, más allá de toda duda razonable.

En primer lugar, el peritaje explica la metodología utilizada para su elaboración, empleando los métodos analítico (examinar las distintas partes de un todo, descomponiendo la estructura para unirlos a posteriori), comparativo (búsqueda de similitudes en la comparación de gestos gráficos y rasgos), deductivo (descomponiendo desde lo general a lo particular el objeto de estudio), demostrativo (contrastación entre elementos y componentes de contraste), la técnica homotética (medida de los distintos trazos de grafías para hallar relaciones de proporcionalidad), las nueve cajas de Aguilera (dividir la rúbrica en una cuadrícula de 3x3 para analizar en las casillas la proporcionalidad y desarrollo de la misma), la técnica grafomotriz (referida al desenvolvimiento del ductus en sí mismo), el sistema grafoscópico (para advertir las características morfológicas del conjunto y los gestos tipo) y la morfología del trazado de Aguilera (que considera las características gráficas inmutables de los textos indubitados).

Luego, resulta necesario considerar la cantidad de material indubitado de comparación, en este caso se contó con 20 firmas de la occisa, estampadas en un amplio período de tiempo, que, a juicio del tribunal, permitió tener claridad a la perito en relación con los rasgos más característicos de la firma de la señora Adriana Beattie, recorriendo desde el año 1973, hasta la misma firma estampada en la carátula del testamento el 19 de junio de 2017, considerada por la perito - apreciación que comparte el tribunal- como la más indubitada de todas, al haberse realizado ante el ministro de fe que declaró en juicio y los testigos presentes al momento del otorgamiento del testamento.



En base a los métodos descritos, se advirtieron por la perito diversos patrones presentes en la firma de la señora Adriana Beattie, que el tribunal pudo apreciar, a modo ilustrativo, los puntos de arranque de las firmas indubitadas, las características de estas firmas en las cajas de Aguilera, la inclinación de los ejes axiales (presentándose un patrón constante entre 84.5° y 86° de inclinación, la forma y ubicación del travesaño de las letras “tt” presentes en la firma, el trazado de la rúbrica que hacía la fallecida luego de estampar la inicial de su nombre y su apellido, la forma y apertura de la letra “a” correspondiente a un “collage”, y la presencia de “arpones” en sus diferentes firmas indubitadas.

Todas estas características descritas son diferentes en la firma estampada en la tercera hoja del testamento cerrado.

Efectivamente, los puntos de arranque de la firma dubitada son distintos de todos aquellos presentes en las firmas indubitadas; las características en cada una de las cajas de Aguilera en la firma dudosa, son diversas de aquellas presentes en las firmas para efectos de cotejo (las hampas son diferentes, el cuerpo medio y las jambas también resultan disímiles); la inclinación axial de la firma escrita en el testamento es de 78°, desigual absolutamente de aquella advertida en todas las firmas de comparación que se tomaron en consideración (que se dijo iban entre 84.5° y 86°); la forma y ubicación de las letras “tt” en la firma cuestionada son completamente diferentes, llamándole la atención al tribunal que en la totalidad de las 20 firmas indubitadas de la firma de la señora Adriana, estas letras eran de la misma altura y paralelas, lo que a simple vista se advierte que no se cumple en la firma dubitada, en que se aprecia una de ellas notoriamente menor, existiendo una diferencia también entre el punto de arranque de su travesaño (de derecha a izquierda en todas las indubitadas, con un gesto tipo en punta y de izquierda a derecha en la dudosa, con un gesto tipo arpón en este último lado, ausente en todas las firmas de cotejo); luego, el trazado de la rúbrica en la firma tiene un arranque de abajo hacia arriba en todas las firmas indubitadas, culminando en el centro, teniendo la indubitada precisamente el contrario, es decir, comenzando en el centro, apreciándose también a simple vista una dibujo no fluido, “abollado” en palabras de la perito; luego, resulta notorio -casi a simple vista- la continuidad de la escritura de las letras “ea” en las firmas de la occisa, su trazado redondeado y con la forma de “collage” como lo explicó técnicamente la perito, lo que no se aprecia en lo absoluto en la firma dubitada, teniendo estas letras una morfología



completamente diferente; finalmente, la presencia constante de “arpones” en la letra “B” de las firmas originales tampoco se aprecia en la firma cuyo valor se desconoce.

Todas estas características, y otras que también fueron referidas por la perito, le permitieron concluir, al igual que al tribunal, que la firma presente en el testamento no corresponde a la de la señora Adriana Beattie Silva, siendo una del tipo “servil ejecutada”.

Las conclusiones anteriores son compartidas por el perito Sr. Daniel Puentes, funcionario de carabineros perteneciente a LABOCAR, cuya labor, si bien se enfocó en mayor medida en diversos cheques tenidos en vista, también abarcó la comparación entre las firmas contenidas en el interior del testamento y en su cubierta, apareciendo diferencias sustanciales entre ellas, referidas a la proporción de la caja y la zona predominante, en los tiempos escriturales, en los puntos de ataque y escape, los trazos curvos y angulosos y sobre todo en su construcción y trazado.

En efecto, el tribunal también pudo apreciar las notorias diferencias existentes entre la firma cuestionada y aquella que la Sra. Beattie estampó frente al notario Iván Toledo, discrepancias que son consistentes con aquellas advertidas por los peritajes analizados anteriormente y que permiten concluir que la firma al interior del testamento no fue realizada por la causante.

Finalmente, y adelantándonos al análisis de la postura de la defensa, el metaperitaje de la perito Sra. Ligia Cárdenas Ponce, profesional cuyo currículum y antecedentes aportados por la querellante también impresionaron al tribunal y cuya exposición del informe fue clarificadora, llevó a concluir que el peritaje tenido a la vista en la causa civil sobre nulidad del testamento, carece de toda metodología, contraviniendo criterios fundamentales de método científico, conteniendo procedimientos ambiguos y no comprobables -como incluso fue reconocido por el mismo perito en estrados, al declarar como testigo de la defensa-.

Pudo advertirse que la pericia objeto de análisis llevada a cabo por el Sr. Navarrete, no contenía imágenes de las firmas consideradas para efectos de cotejo, seleccionando sin ningún criterio, tres de ellas para cotejarlas con la firma dubitada, sin mantenerlas para las futuras comparaciones, no cumpliendo con diversos parámetros que sí se advirtieron en los demás peritajes como la



suficiencia de las firmas, la coetaneidad de las mismas, el que sean homólogas y equi circunstanciales. Además, en el peritaje cuestionado se utilizó simplemente una lupa para efectuar el análisis, sin contar con otros medios tecnológicos presentes en los peritajes de cargo, realizando un cotejo incompleto, el que en algunos casos incluso se aprecia a simple vista, como la proporción de los trazos o la caja caligráfica, advirtiéndose una falta absoluta de prolijidad en el peritaje del Sr. Navarrete, concluyéndose al igual que lo hizo la perito Cárdenas, que el peritaje agregado en sede civil no reviste la más mínima científicidad para considerarlo como válido, descartándose sus conclusiones en cuanto a la validez de la firma estampada en el cuerpo del testamento.

**DÉCIMO TERCERO:** Como también se estableció en los acápites precedentes, las disposiciones incluidas en dicho testamento fueron utilizadas por el acusado con posterioridad al fallecimiento de Adriana Beattie, incluso antes de su apertura, toda vez que no fue discutido el hecho que Patricio Araneda se mantuvo en la vivienda con posterioridad de la muerte de la señora Beattie, expresando al momento de su fallecimiento y en la apertura del testamento, conocimiento del contenido y privando a los sobrinos del ingreso al domicilio, como también se estableció en sus declaraciones, tomando contacto con la corredora de propiedades para vender o arrendar el inmueble, y arrendándolo con posterioridad.

Finalmente, el uso malicioso del instrumento en cuestión puede desprenderse de diversos hechos, siendo el primero de ellos, la situación ocurrida en relación con la transferencia del vehículo de propiedad de la señora Beattie, ya que lógicamente puede estimarse que el acusado tenía conocimiento que la intención de la causante no era instituirlo como heredero universal, en primer lugar porque resultó acreditado que poco tiempo antes del aparente otorgamiento de este testamento, la señora Beattie, le manifestó a carabineros, a sus amigos (Sr. Dúmenes y Sra. Gospodneteic) y a su sobrino, su intención que el acusado hiciera abandono de la casa que ocupaba en el patio trasero de su propiedad tras un altercado que incluso tomó ribetes físicos; asimismo, exigió la reversa de la transferencia de dicho vehículo, cuestión que realizó el acusado a los días de haberse transferido el jeep de propiedad de la causante; luego, dentro de sus bienes se comprendían derechos en el mausoleo familiar, el que según los dichos contestes de los testigos Beattie, y de la abundante prueba circunstancial respecto



al carácter de la señora Adriana, resultaba altamente improbable que dejara a un tercero, excluyendo a sus familiares.

Luego, si era el acusado quien aparentemente mantenía una relación de cuidado, estrecha y cercana con la occisa, transportándola -asumiendo que dicha labor también la realizó con la señora Beattie al momento de su firma en la Notaría-, resulta obvio el conocimiento que tenía de que ella no fue quien firmó dicho documento, más aun considerando las diversas inconsistencias en el cuerpo del escrito, referidas a la ausencia de la indicación completa de su fecha de otorgamiento, la discrepancia de la escrituración de los apellidos de los padres de la causante, la redacción en términos masculinos, valiéndose de dicho documento para obtener beneficios económicos al asumir la calidad de heredero universal frente a los familiares, ocupando el inmueble y los enseres de la occisa, e impidiendo el acceso a ellos a los herederos legales.

Las motivaciones anteriores llevan a concluir forzosamente que se configura el tipo del artículo 196, en relación con los artículos 194 y 193 N°1 y 2 todos del Código Penal.

### **PARTICIPACIÓN**

**DÉCIMO CUARTO:** Al acusado le ha correspondido participación en calidad de autor en los hechos señalados, toda vez que, para acreditar que fue él quien usó el documento falso con conocimiento de que la firma, se contó con la abundante prueba de cargo ya referida, que permitió más allá de toda duda razonable, determinar que el contenido de este testamento falso fue empleado por él en su favor, y en desmedro de los sobrinos Jorge, Verónica y Claudia todos de apellido Beattie.

### **CONGRUENCIA**

**DÉCIMO QUINTO:** Los hechos descritos, y que el Tribunal tuvo por acreditados, guardan concordancia con aquellos indicados en la acusación fiscal, cumpliéndose de esta manera, con lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal.

### **ITER CRIMINIS**

**DÉCIMO SEXTO:** El delito en cuestión es de mera actividad, encontrándose consumado al momento del uso del instrumento, y en este caso, no resultó relevante esperar la apertura del testamento, su protocolización u otro trámite posterior, toda vez que ya al momento del fallecimiento, el acusado se



valió de este instrumento, arrogándose, como se dijo, la calidad de heredero universal de los bienes de la causante.

### **POSICIÓN DE LA DEFENSA**

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Como indicó en sus alegatos de apertura y clausura, la defensa, solicitó la absolución de su representado por el delito de uso malicioso de instrumento público, alegando que no se cumplen los requisitos del tipo penal, y que se debe acreditar la falsedad material o ideológica del instrumento.

En primer lugar, la calidad del documento ya se abordó en acápites anteriores, concluyéndose que el tipo penal por el que fue acusado corresponde al uso malicioso de instrumento público, debiendo estarse a lo ya dicho en relación con delito en comento y las cuestiones jurídicas ventiladas a su respecto.

Luego, se cuestionó por la defensa el que no se hizo por los acusadores algún peritaje caligráfico de la firma o escritura del acusado, señaló que nunca se hicieron estas pericias, siendo muy relevantes. Sin embargo, lo anterior no resulta efectivo, toda vez que no se acusó a Patricio Araneda como autor material de la falsificación de la firma, sino que, por el uso malicioso del testamento falso, de ahí que, aun cuando puedan existir sospechas que él fue quien realizó la firma en el testamento, las que pueden tener asidero al analizar la situación de los cheques, lo cierto es que aquellas pruebas resultan irrelevantes para determinar el tipo penal en cuestión.

En seguida, se alegó que el testamento, lo acompañó la propia causante, lo llevó voluntariamente ante el Notario, y lo hizo en presencia de los testigos. Pues bien, en nada influyen estas circunstancias para la determinación del tipo penal o la culpabilidad del acusado, toda vez que lo que se entregó en el oficio del notario, -como fue reconocido por dicho escribano- fue un sobre cerrado, cuyo contenido no se dio a conocer en dicho acto, por lo que no puede desprenderse que Adriana Beattie tenía conocimiento de lo que estaba al interior de dicho sobre, al respecto, la defensora sostuvo que el testamento cerrado no es secreto, lo que está en abierta contradicción con lo que establece el artículo 1008 del Código Civil que establece «...y testamento cerrado o secreto, es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas», haciéndolos sinónimos.

La defensa también alegó que si lo que se cuestiona es el contenido del testamento, sólo basta la firma del causante, siendo irrelevantes los errores referidos a la fecha, el apellido de los padres de la causante o la redacción en



masculino del mismo, y que la firma varía a través del tiempo, no siendo siempre idéntica en el trazo.

Pues bien, los errores contenidos en el testamento son circunstancias referenciales que se emplearon para reforzar la convicción de falsedad del acto jurídico en cuestión, pero, como se ha reiterado, lo realmente trascendente en este escenario consistió en la falsedad de la firma estampada en el documento, la que fue acreditada más allá de toda duda razonable, como ya fue explicado latamente.

La defensa del acusado también expresó que, en lo referente a los cheques, aquellos tampoco fueron protestados por disconformidad de firma, siendo certificados por el banco como originales.

Nada de esto tiene relevancia para efectos de la convicción del tribunal, ya que los cheques y su peritaje solo pudieron servir como evidencia circunstancial o de contexto, pero en nada se relacionan con la tipificación del ilícito en cuestión, por lo demás, existieron peritajes que concluyeron tajantemente que la firma estampada en dichos cheques tampoco correspondía a la señora Beattie, no siendo un antecedente válido el que el banco no los haya protestado, ya que la actividad desarrollada por el cajero al momento de presentarse un cheque a su cobro, en ningún caso puede asimilarse a un peritaje.

A continuación, la defensora, en referencia al juicio de nulidad de testamento, expone que aquella es la herramienta legal que se entrega para estos efectos, existiendo dos sentencias del 2° Juzgado Civil de esta ciudad y la Corte de Apelaciones, rechazándose esta acción en atención al peritaje que se realizó en dicha sede. Existen además peritajes del Labocar que establecen que no existe firma indubitada por lo que no fue considerada, finalmente, que el peritaje de los acusadores fue pagado por ellos, no siendo objetivo, y siendo rechazado en su oportunidad en sede civil.

Al igual que las anteriores, todas estas alegaciones son descartadas por el tribunal, toda vez que las sentencias dictadas por el Juzgado Civil y la Corte de Apelaciones dicen relación con una materia de otra índole, esto es, con la nulidad de un acto jurídico, asimismo, las falencias advertidas en el peritaje realizado en dicha sede por el Sr. Navarrete ya fueron abordadas, permitiéndole al tribunal descartar absolutamente su validez. Al respecto resulta útil reproducir en este acápite parte de las declaraciones de este perito, acompañado como testigo por la defensa, al respecto, este deponente señaló al querellante que: «Se sube el

*documento en un archivo adjunto, el peritaje subido es el documento completo sin anexos, tampoco se subieron imágenes de las 22 firmas, las firmas de la dirección del tránsito eran 15 firmas de las solicitudes de la licencia de conductor, pero no recuerda el papel, no recuerda el lápiz con el que se hicieron.*

*No consignó el tipo de tinta o papel en su informe.*

*Las otras firmas las obtuvo del registro civil, 5 documentos notariales del archivo notarial, no se recuerda el papel ni la tinta...».*

Preguntado sobre la morfología general, respondió que *«...utilizó todas las firmas genuinas, la fotografía del informe es solo demostrativa para hacer énfasis en ciertas características. No recuerda cuantas imágenes insertó, ni su fecha...»*. Consultado sobre la rapidez de la escritura indicó que: *«...realiza en cada característica alguna imagen de apoyo, no recuerda si incorporó una imagen...»*

En relación con los matices de presión *«...no recuerda...»*, respecto de las imágenes incorporadas, expresó en una primera instancia que *«...seguramente incorporó referencias de las imágenes...»*. Contrainterrogado, se advirtió una contradicción, ya que respondió al ver su informe que, *«...no insertó la información»*, preguntado por las firmas indubitadas, respondió que *«No recuerda el documento que indica "firma genuina"»*. Luego, en relación con el análisis grafoscópico, de inclinación de los trazos, expuso que: *«se incluye en él, no recuerda haber hecho este análisis. No hizo análisis de los cuerpos medios»*.

Como se dijo anteriormente, a juicio del tribunal este peritaje carece de toda validez científica, además de no ser vinculante para la judicatura penal -ni aun para la civil en su oportunidad-, por lo que todas las alegaciones referidas a este juicio y el peritaje que se realizó en él carecen de relevancia e impiden alterar las conclusiones a las que se ha venido arribando.

Tampoco resta validez a los peritajes de cargo, el que los honorarios de las profesionales que los evacuaron hayan sido pagados por los querellantes, ya que se dio cuenta de su cualificación en la materia, siendo presentados por el propio Ministerio Público, y apreciándose absolutamente completos y profesionales, concordantes con el peritaje de LABOCAR y con la restante prueba rendida.

La defensa también mencionó los recursos intentados por los querellantes, alegando que se encuentra ejecutoriada la sentencia de nulidad, ya que la naturaleza misma de la revisión exige una sentencia firme y ejecutoriada. En este aspecto, repetimos, el presente juicio tiene un objeto diverso de aquellos, una

causa de pedir diferente y en ningún caso está supeditado a la suerte que tenga la acción civil que se interpuso en su oportunidad por los querellantes, de ahí que esta alegación también carece de sustento.

La representación del acusado alegó también que no se acreditaría el uso malicioso imputado, ya que la sentencia que rechaza la nulidad se encontraba ejecutoriada, pudiéndose arrendar la casa objeto de la herencia, ya que legalmente el acusado es el legítimo heredero, sin embargo, y como se dijo a propósito del concepto de “uso”, aquel resultó probado al haberse irrogado el acusado la calidad de heredero, causando perjuicios a los querellantes de la forma en que se explicó.

En efecto, el que haya quedado ejecutoriada la sentencia de nulidad de testamento en nada exime o imputa responsabilidad en el ilícito penal que nos ocupa, las pruebas rendidas en uno y otro juicio son diversas, los objetos y causas de pedir son diversas, y resulta relevante para descartar esta alegación el completo descrédito que a ojos de este tribunal tiene el peritaje llevado a efecto en dicha sede.

Finalmente, se alegó por la abogada del imputado el que la causante al momento de testar se encontraba lúcida, constituyendo un mandato para el acusado, para que fuera el quien se hiciera cargo de su enfermedad, advirtiéndose la confianza que le tenía y que los querellantes no la visitaron y no tenían relación con ella, fabricando un delito para efectos económicos.

Estas alegaciones también serán desestimadas, ya que la lucidez de la causante al momento de entregar el sobre y estampar su firma en la carátula, en nada influye a la falsedad o veracidad de la firma contenida en su interior, al contrario, llama profundamente la atención que la rúbrica estampada en el acto jurídico inserto en el sobre se haya realizado sobre una hoja en blanco, con el número de cédula de identidad impreso con antelación, a diferencia de lo que se hizo en su cubierta, en donde la causante escribió su rut de su puño y letra, y que en su estado de lucidez, haya escrito mal el apellido de sus padres, o redactado el testamento en términos masculinos, sin datarlo, debiendo estarse a lo razonado en cuanto a la autenticidad de la firma contenida en su interior.

Asimismo, resultó un hecho acreditado la buena relación que tenía la occisa con sus sobrinos, en especial con su sobrino Jorge, rindiéndose prueba suficiente al efecto, contándose con testimonios creíbles de amigos, terceros extraños y



desprendiéndose de su propio actuar al momento del altercado que tuvo el acusado con su tía, concurriendo de inmediato a su domicilio, o viajando desde la ciudad de Santiago para el funeral de Adriana Beattie el mismo día, de manera tal, que debe desestimarse la alegación referida a la falta de cercanía o mala relación que haya tenido la occisa con sus sobrinos y que habría sido uno de los motivos para dejar todo su patrimonio al acusado.

### **RESOLUCION DE ABSOLUCION O CONDENA**

**DÉCIMO OCTAVO:** En consecuencia, y como se adelantó en el veredicto, el Tribunal, por unanimidad, estima que, al acusado, le corresponde participación como autor en el delito de uso malicioso de instrumento público falso, ilícito por el que fue acusado, por cuanto se alcanzó el estándar impuesto por la ley para arribar a una decisión condenatoria en su contra.

En relación con los hechos referidos al mandato y transferencias del vehículo o la firma de cheques de propiedad de la occisa, aquellos no fueron considerados para efectos de la decisión, más allá de ser elementos circunstanciales y de contexto a tener en consideración.

### **CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL**

**DECIMO NOVENO:** Que, si bien en la acusación fiscal no se invocaron circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la defensa solicitó la aplicación de la atenuante contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal.

Llama la atención al tribunal la falta al principio de objetividad observado por la fiscalía al respecto, toda vez que es de su cargo acompañar el certificado de antecedentes del acusado, a efectos de determinar su procedencia. Al no haber antecedente alguno al respecto, se tiene por configurada, al estarle vedado al tribunal obtener los antecedentes por su cuenta, en consideración al principio acusatorio.

**VIGÉSIMO:** Que la defensa también ha alegado la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, del artículo 11 N°9 del Código Penal, toda vez que el acusado fue citado a declarar ante la policía, prestando su testimonio, compareciendo a los actos del procedimiento.

Se descartará absolutamente la aplicación de esta circunstancia, ya que en ningún caso puede considerarse la comparecencia a los actos de investigación o la declaración vertida en sede policial como una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, más aún considerando que no se contó con su

versión en el juicio, negando su participación en los hechos a través de su defensa.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que el Ministerio público no hizo alegaciones sobre circunstancias modificatorias, señalando únicamente que respecto de la atenuante del artículo 11 N°6, «*no se acompañaron antecedentes*», debiendo remitirnos a lo dicho a propósito de la falta al principio de objetividad al respecto y en relación con la atenuante del artículo 11 N°9 que no hay prueba de aquella, debiendo también estarse a lo dicho previamente.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, los querellantes alegaron, en primer lugar, la circunstancia agravante del artículo 12 N°9, esto es, «*Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho*». Pues bien, no existe ningún antecedente que permita configurar esta modificatoria, no se precisaron cuales serían los medios que habría utilizado el acusado para añadir la ignominia a los efectos del delito, asimismo, la situación referida al mausoleo familiar no puede considerarse para estos efectos, ya que los derechos de la señora Beattie en aquél, se incluyen en la masa hereditaria, descartándose algún actuar del acusado para elevar la afectación a los querellantes más allá de la privación de su calidad de herederos.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, finalmente se invocó por el acusador particular la circunstancia modificatoria del N°18 del artículo 12 del Código Penal, esto es, «*Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso*».

Al respecto tampoco existe prueba alguna que permita configurar esta agravante, no se acreditó por el acusador particular la conducta que habría sido desplegada por el acusado y que ofendiera o despreciara el respeto por la ofendida, cabe recordar que en este caso, si bien los perjudicados económicamente al perder su calidad de herederos son los herederos de la occisa, el bien jurídico protegido por este ilícito es la fe pública, siendo la sociedad toda la perjudicada por este actuar, de ahí que esta agravante no tiene cabida en este ilícito en particular.

En consecuencia, le favorece al acusado una circunstancia atenuante y ninguna agravante.

#### **DETERMINACION DE LA PENA**

**VIGÉSIMO CUARTO:** El delito de uso malicioso de instrumento público se encuentra penado en el artículo 194 del Código Penal, estableciéndose una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años.

Al concurrir una circunstancia atenuante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del Código Penal, y considerando la extensión del mal causado, en especial, el que los efectos del delito en lo que dice relación con la determinación del orden sucesorio de los querellantes puede retrotraerse, la pena se aplicará en el grado menor, en su mínimo, esto es 541 días de presidio menor en grado medio.

#### **RESPECTO AL COMISO**

**VIGÉSIMO QUINTO:** En lo que dice relación a la pena de comiso del testamento solicitada por el querellante, cabe señalar que el artículo 31 bis del Código Penal señala *«El comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que ha servido de instrumento en la perpetración del hecho sólo será impuesto en la sentencia condenatoria y siempre que la cosa haya sido utilizada en la perpetración de un delito»*.

*Lo dispuesto en el inciso anterior no procederá respecto de terceros de buena fe. El tribunal prescindirá de su imposición cuando la privación de su propiedad le ocasione un perjuicio desproporcionado al afectado»*.

En este caso, a juicio del tribunal no resulta aplicable esta disposición, al tratarse de un instrumento protocolizado, que eventualmente puede afectar derechos de terceros, existiendo recursos judiciales pendientes en relación con su aspecto civil, los que incluso pueden verse afectados con la destrucción del testamento, de manera tal que no se aplicará a su respecto.

#### **PRUEBA NO UTILIZADA**

**VIGÉSIMO SEXTO:** De la prueba de cargo utilizada para acreditar los hechos establecidos previamente, tanto la incorporada por el Ministerio Público, como aquella aportada por los querellantes, se utilizó lo sustancial y relevante al caso, descartándose pruebas referidas a circunstancias externas o que no influyen en el sustrato fáctico o la determinación de culpabilidad. Cabe hacer una mención especial a las causas de familia referidas al acusado, incorporadas por la fiscalía con el propósito de acreditar aspectos personales, familiares y de conducta del acusado, siendo absolutamente irrelevantes para efectos de determinar los hechos por los que acusó.

No deja de llamar la atención la gran cantidad de prueba que se incorporó y que en realidad no tiene vínculo alguno con la acusación fiscal, en efecto, los cheques acompañados, los e-book de causas de familia, los oficios remisores de documentos -tanto aquel de la 1° Comisaria de Carabineros, como el proveniente de la dirección de tránsito de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, o la propia carpeta de esta entidad referida a las licencias de conducir de la señora Adriana Beattie, en nada aportan a la acreditación del hecho punible por el que se acusó, y si bien es resorte del tribunal competente en su oportunidad depurar la prueba que llegará al juicio oral, es función y deber del Ministerio Público aportar aquella útil para efectos de sustentar su propia acusación, lo que en el presente caso se aprecia como un deber incumplido.

Luego, la prueba de videos agregada por los querellantes sólo busca demostrar la metodología empleada por las peritos que actuaron en esta causa, la que ya se encuentra incorporada y fue descrita por las propias profesionales al momento de evacuar su pericia, resultando sobre abundantes para tal efecto; de igual forma los oficios remisores o instrucciones particulares para permitir peritajes no constituyen prueba de un hecho, siendo meros documentos conductores que en nada se vinculan con la acusación.

Finalmente, y en lo que dice con la prueba aportada por la defensa, cabe señalar que ciertos pasajes de la testimonial rendida, aportaron incluso a la acreditación de determinados hechos, como la relación de cercanía de Jorge Beattie con su tía, o las labores que desempeñaba el acusado para Adriana Beattie, o incluso el conocimiento que el acusado tenía de las disposiciones testamentarias de forma previa al testamento.

El resto de su prueba, tendiente a acreditar que la voluntad de doña Adriana Beattie fue instituir al acusado como su heredero universal, no tiene la entidad suficiente para sustentar su teoría de defensa, en efecto, la testigo Cenia Gospodnieteic refirió vagamente que: *«Adriana le dejó todo al Patricio Araneda, eso le dijo a ella antes de morir»*, agregando que *«...ella quería dejarle sus bienes (a Jorge Beattie), con el sobrino se llevaban muy bien, salían a comer, pero después de un tiempo cambió la actitud a favor de patricio, cambió la forma de pensar, no sabe bien porqué»*. Estos fragmentos de su testimonio, y que podrían sustentar la postura del acusado, se consideran vagos, imprecisos e incompletos para tales efectos, toda vez que no guardan correspondencia con la restante

prueba, a diferencia de las partes consideradas para sustentar los cargos que sí guardan relación con la abundante prueba ya referida latamente.

Luego, el testimonio de Erick Alejandro Peruzovic, tampoco permite acreditar la postura del imputado, efectivamente, si bien el testigo refiere que *«...entiende que es por la herencia que le dejó la Nany a Patricio, él conoció a Adriana y la Nany siempre le dijo que le iba a dejar todo a Pato porque se lo merecía...»*, agregó que *«...le consta que Adriana le quería dejar los bienes, porque en los últimos años cuando pasó hizo presente que quería dejarle la herencia por su apoyo y que siempre había estado preocupada por ella, eso fue por el 2016»*, este testimonio se descarta por dos motivos, en primer lugar por la poca precisión del testigo en cuanto las circunstancias o períodos en que la señora Beattie le habría manifestado su intención de dejarle sus bienes al acusado, pero principalmente por la contradicción entre estos dichos y la realidad de los hechos acreditados, en relación a la reversa de la transferencia del vehículo hecha al acusado poco tiempo antes del otorgamiento del testamento o de la intención de Adriana Beattie de que el acusado abandonara su domicilio, y en segundo lugar, este testigo manifestó no vivir en Punta Arenas mientras el acusado vivía en la calle Colón, lo que resta todo valor a sus dichos en este sentido.

Finalmente, el testigo Sr. Mercado solo da cuenta del hecho de haber sido testigo del otorgamiento del testamento, sin aportar nada respecto de la supuesta voluntad de la causante u otra circunstancia relevante para exonerarlo de responsabilidad.

De igual manera el peritaje de Jaime Sandoval lo único que aporta es la imposibilidad de realizar el peritaje a la firma dubitada en su oportunidad por carecer de los requisitos necesarios para hacer el cotejo, al contar solo con una fotografía, lo que incluso permite reforzar las conclusiones del meta peritaje realizado al informe del Sr. Navarrete ya referido, y cuyo testimonio fue analizado, por lo demás, aquel peritaje versaba sobre los cheques, documentos que, como se dijo, no guardan relación con los hechos acreditados y el tipo penal por el que se acusó. Lo mismo cabe concluir respecto a la declaración de Jonathan Venegas, cuyo testimonio no puede considerarse un informe pericial propiamente tal, toda vez que hizo una revisión de forma del peritaje anteriormente señalado, concluyendo en el mismo sentido.



Finalmente, la prueba documental aportada por la defensa, salvo la referida a la causa C-1503-2018 del 2° Juzgado Civil de Punta Arenas, y su tramitación posterior, a la que ya nos referimos, no será considerada, ya que una resulta una reiteración del peritaje ya vertido (Oficio N°268 de 19 de julio de 2023 de Sección Criminalística LABOCAR, que establece que no se hace el informe por no ser las muestras indubitadas coetáneas, homólogas, suficientes, equi circunstanciales); otras fueron acompañadas para reforzar una apreciación de la defensa (el carnet de identidad y la licencia de conducir de la señora Beattie, y sus “parecidos” con la firma del testamento según la defensora), y la restante corresponde a un documento Word sin firma, inútil para efectos de acreditar alguna circunstancia, y la escritura pública protocolizada bajo en N°338 de fecha 22 de mayo de 2018, que en nada aporta a la discusión y acreditación fáctica ya señalada.

En conclusión, la prueba considerada, lo fue para determinar los hechos relevantes y referidos a la acusación, reproduciendo lo esencial para ello, sin considerar elementos externos o que no dicen relación con los hechos, guardándose con ello, la exigencia legal del artículo 297 del Código Procesal Penal.

### **PENAS SUSTITUTIVAS**

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, en atención a la extensión de la pena que se impondrá, el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos del artículo 4 de la Ley 18.216, al advertirse la inexistencia de anotaciones prontuariales pretéritas del acusado y sus antecedentes personales y sociales entregados por la defensa, en el momento procesal pertinente, se estima que la remisión condicional de la pena resulta una alternativa viable para permitir la reinserción del acusado, evitando la reiteración de estas conductas por su parte en lo sucesivo.

### **COSTAS**

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, se adoptó la decisión de condenar al acusado del ilícito de uso malicioso de instrumento público falso, por lo que se le impondrán las costas de acuerdo con el artículo 47 del Código Procesal Penal.

En consecuencia, por lo razonado y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14, 31 bis, 50, 68, 193 N°1 y 2, 194, 196 y demás pertinentes del Código Penal; 1, 4, 45, 47, 295, 297, 340, 341, 342 y demás pertinentes del Código Procesal Penal y 1, 3, 4 y demás pertinentes de la Ley 18.216, se declara:





**I.-** Que **SE CONDENA** a **PATRICIO ANTONIO ARANEDA MENA**, ya individualizado, por la participación que tuvo en calidad de autor del delito de **USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO FALSO**, cometido en esta ciudad el 19 de junio de 2017 a la pena de **541 días de presidio menor en su grado medio** y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

**II.-** Para el cumplimiento de la pena corporal, se concede la pena sustitutiva de **remisión condicional, por el término de la condena**, período durante el cual estará sujeto al control de Gendarmería de Chile, no registrando abonos para el caso de su eventual revocación o intensificación

**III.-** Que **SE CONDENA** en costas al condenado de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

Notifíquese a los intervinientes.

Ejecutoriado que quede este fallo, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 488 del Código Procesal Penal y remítase copia autorizada al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para los fines pertinentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

No firman el magistrado Jaime Alvarez Astete, por no encontrarse en funciones y le Juez Octavio Salinas Cabrera por hacer terminado su suplencia.

**RUC N1810036980-6**

**RIT N°128-2023**

**CÓDIGO 302**

**PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ESTA CIUDAD, DON JAIME ÁLVAREZ ASTETE, DOÑA ROSANA VIDAL OJEDA Y DON OCTAVIO SALINAS CABRERA, QUIEN REDACTÓ.**